Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

**Tesis: Periodistas en zonas de conflicto,
entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión**

Presentado por: Natalia Torres Díaz

Director: Heyder Alfonso Camelo

Universidad Santo Tomás

Maestría en Defensa de los Derechos Humanos

Facultad de Derecho

2017

Contenido

1. Introducción	3
1.1. Metodología	6
2. Estado de la libertad de prensa en el mundo	7
2.1. Marco jurídico provisto para la protección de la libertad de prensa a nivel internacional	10
2.2. Estado de la Libertad de prensa en los estados americanos	18
2.2.1. Marco jurídico provisto para la protección de la libertad de prensa en los Estados Interamericanos	19
2.2. Herramientas de protección para la Libertad de Prensa	28
3.2.1. Medidas provisionales de la Corte Interamericana	28
3.2.2. Medidas cautelares en la Relatoría para la Libertad de Expresión en la CIDH	29
2.3. Jurisprudencia en América	30
2.3.1. Jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos	32
2.3.2. Jurisprudencia interna en Estados Americanos	36
3. Estado de la libertad de prensa en Colombia	40
4.1. Marco Jurídico de Colombia	40
4.2. Herramientas de Protección	46
4.2.1. Situación nacional del periodismo	52
4.2.2. Situación regional del periodismo en zonas con conflicto armado	54
4. Casos específicos de periodistas amenazados por su oficio en Colombia	58
5.1. Caso 1: Carmen Rosa Pabón – periodista de Arauca	60
5.2. Caso 2: Sonia Godoy – periodista de Cauca	68
5. Análisis	75
6. Conclusión y propuestas	79
7. Anexos	81
8. Bibliografía	88

1. Introducción

Ejercer la libertad de prensa en Colombia es una labor complicada. Más allá de las propias dinámicas de la profesión, se presentan ciertas situaciones que amenazan el trabajo periodístico. La búsqueda de la información y de la verdad ha generado que los periodistas, específicamente los de región, sean blanco de amenazas contra su vida e integridad, un hecho que no solo afecta al comunicador, sino a la sociedad en general.

Según Miguel Carbonell, doctor en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2014), asegura que sin la libertad de prensa se estaría violando el derecho al descubrimiento de la verdad; la autorrealización y de la participación democrática, entre otros derechos fundamentales.

El Estado, en su deber protector, no ha logrado evitar la latente y constante violación de la Libertad de prensa. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 1999 hasta febrero de 2017 ha auxiliado¹ a más de 1.700 periodistas en riesgo y ha registrado 153 asesinatos desde 1977. Asimismo, las cifras de la FLIP han revelado que en 2016 se presentaron 216 violaciones y 262 víctimas² de algún tipo de daños o afección (agresión, amenaza, asesinato, atentado contra infraestructura, desplazamiento, detención ilegal, estigmatización, exilio, obstrucción al trabajo periodístico, trato inhumano o degradante u otras formas de afección); lo que representa un número mayor, a comparación de las 147 violaciones y 232 víctimas que se presentaron en 2015, y más aún de las 166 víctimas y 133 violaciones que se dieron en 2014. Igualmente, el primer bimestre de 2017 también señala que los daños continúan, con un registro de 18 violaciones y 20 víctimas.

A pesar de las medidas de protección que algunos periodistas reciben por parte del Estado, algunas se vuelven obsoletas, demoradas o insuficientes para la cantidad de profesionales amenazados, generando que más comunicadores abandonen su profesión, sufran de desplazamiento forzado o se

¹ El auxilio de la FLIP consiste en recibir las denuncias de los periodistas amenazados y trasladar las solicitudes a los entes estatales encargados de la protección de los comunicadores. Principalmente, la FLIP se encarga de hacerles un seguimiento a los procesos en las entidades y solucionar los problemas de amenazas y daños contra los periodistas.

² Las violaciones son los hechos donde se presentan las afecciones. Ejemplo: en un hecho de violación, se registran tres víctimas (definición de la FLIP).

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

vean obligados a la autocensura, como lo presenta la FLIP y otras organizaciones nacionales e internacionales enfocadas en la libertad de prensa en algunas de sus publicaciones.

De acuerdo con un estudio de la FLIP y Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado en agosto del 2015, en ese periodo hubo 131 casos de periodistas protegidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP), de los que el 75 por ciento no se sentían conformes con el sistema de seguridad brindado por el Estado.³ Según el informe, el 58 por ciento de los consultados, la UNP implementa medidas blandas para resolver los problemas de seguridad que aquejan a los periodistas.

Además de las amenazas contra la profesión, la impunidad es otra de las situaciones que afecta el oficio. Para 2014, de los 142 homicidios de periodistas en oficio registrados desde 1977, 66 prescribieron (FLIP, 2014). Según Camilo Vallejo de la FLIP, a pesar de que en la mayoría de las situaciones se conocían los autores materiales e intelectuales de los crímenes, las demoras y violaciones contra el debido proceso ayudaron a que continuara la impunidad, dejando como claro responsable al Estado por los retrasos en las investigaciones por parte de la Fiscalía y los juicios contra los responsables (C. Vallejo, entrevista personal 29 de abril de 2016).

Ante estas situaciones es evidente que el periodismo y la libertad de prensa se encuentran en constante amenaza. No solo por parte de los victimarios que utilizan las agresiones como método para silenciar la verdad, sino por la falta de garantías procesales para judicializarlos (a los victimarios).

Los principales afectados por estos daños contra su profesión se encuentran en regiones donde el conflicto armado es latente. Allí, las garantías de protección se vuelven escasas, como lo afirma Vallejo. Los comunicadores sociales amenazados se ven en la obligación de generar mecanismos de autoprotección mientras esperan las medidas de protección que puede entregar el Estado. Ante este panorama, se genera una pregunta base: ¿El Estado colombiano cumple con las medidas necesarias para que los periodistas amenazados de región retomen sus labores cotidianas sin

³ Las organizaciones protectoras de los intereses de los comunicadores se dieron a la tarea de consultarles a los periodistas, para determinar si la UNP les brinda las garantías necesarias en su protección.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

necesidad de autocensurarse, cambiar de profesión, desplazarse a otras regiones o cambiar de discurso? ⁴

Para responder este interrogante, a continuación se presentará el estado de la libertad de prensa en los Estados Americanos y el resto del mundo, como panorama general de la situación de los periodistas. Asimismo, se expondrán las herramientas internacionales dispuestas para la protección del derecho de la libertad de prensa y expresión, además de la jurisprudencia en la que se ha avanzado sobre el tema. En el capítulo 4, con una mirada más interna, se expondrá la situación de Colombia, enfocada a los territorios en conflicto armado, y cómo estas dinámicas les generan amenaza a los comunicadores. También se presentará la jurisprudencia y las herramientas internas en las que se ha avanzado.

Como abordaje metodológico y panorama detallado de lo que le puede pasar a un comunicador en territorio con presencia de guerrillas y otros actores armados ilegales, se presentan dos casos de periodistas amenazadas en Cauca y Arauca. Estas dos historias se seleccionaron por sus similitudes: Cada una recibió protección del Estado; aún tienen riesgo de amenazas por parte de actores activos en el conflicto armado colombiano; las dos periodistas son las corresponsales de la FLIP en su territorio⁵, hecho que las hace referentes de buenas prácticas en el oficio; las amenazas hacia las dos mujeres iniciaron en el mismo periodo, y dichas agresiones fueron consecuencia de las denuncias que las periodistas hacían en sus medios de comunicación. Cabe resaltar que, además de los argumentos expuestos, estos dos casos se seleccionaron sobre otros, por la cercanía entre la autora de la tesis y las periodistas, hecho que facilitaba el acceso a sus historias, una mejor capacidad de manejo y análisis más profundo⁶.

⁴ Es importante aclarar que la libertad de prensa (derecho a informar en un medio de comunicación) está estrechamente ligada a la libertad de expresión (derecho de todas las personas a expresar sus opiniones libremente). No se puede hablar de uno o el otro derecho de forma separada, ni mucho menos distinta. Sin embargo, en el desarrollo de esta tesis se tratará de abarcar, específicamente, el derecho de la libertad de prensa. Este foco estará direccionado a la labor propia de los periodistas que investigan, informan y comunican dentro de un medio de comunicación.

⁵ Esto indica que son las responsables de alertar de cualquier tipo de amenaza o situación que afecten a los colegas de sus departamentos.

⁶ La cercanía entre las periodistas y la autora permitió una facilidad en el trabajo de campo, por temas de desplazamiento a terreno.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Entre algunos detalles destacables, se puede referir que la periodista de Cauca lleva más de 15 años en el oficio, los principales actores de amenaza fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares. Por su parte, la periodista Arauca lleva alrededor de 30 años en el oficio y el actor de amenaza a su oficio fueron las Farc.

Finalmente, hay un análisis del tema, conclusiones y unas posibles propuestas que pueden contribuir a la protección efectiva de la libertad de prensa.

1.1. Metodología

La tesis se basa en una investigación socio-jurídica. Esta metodología se elige por su naturaleza Derecho-sociedad que responde especialmente el fenómeno de la validez normativa, como lo explica el Módulo No.56 de la Universidad Santo Tomás (USTA). Asimismo, cuenta con un trabajo de campo con periodistas amenazados por su oficio y que recibieron acciones del Estado para su protección. Se realizaron entrevistas a ONG (FLIP) y organizaciones del Estado como la Unidad de Protección⁷.

Previo al trabajo de campo, se realizó un análisis teórico-documental para explorar y conocer más a fondo las implicaciones, deberes y garantías que trae la libertad de prensa, así como la situación actual de la protección a los periodistas en Colombia. Para ello hubo una revisión de: bibliografías nacionales e internacionales del tema; análisis de casos registrados en la FLIP del último año; búsqueda en internet, específicamente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, La Unesco, bibliotecas virtuales (ej: Minnesota University), así como de bibliotecas públicas y de la biblioteca USTA.

⁷ Por temas de seguridad, la entrevista a la UP solo se utilizó como referente para conocer el estado de la libertad de prensa y expresión en Colombia. Ningún testimonio se presentará de ellos.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

En conclusión, la metodología de investigación es inductiva, con apoyo de la IAP, teórico-documental con características: descriptiva⁸, propositiva⁹ y jurisprudencial¹⁰.

2. Estado de la libertad de prensa en el mundo

Desde 1993, la Asamblea General de la ONU por iniciativa de países miembros de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha proclamado el 3 de mayo como día universal de la libertad de prensa con el propósito de fomentarla en el planeta, al reconocer una prensa libre, pluralista e independiente como un componente esencial de toda sociedad democrática, la fecha recuerda también la instauración de la declaración de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo.

Paradójicamente, los últimos datos sobre la libertad de prensa señalan que la situación de los periodistas en el mundo tiende a empeorar. Los mismos Estados que dicen velar por la protección de sus derechos, han fracasado en el deber de protección.

Según comunicados anuales de Reporteros sin Fronteras (RSF), entre 2013 y 2016 se ha observado una decadencia en los indicadores de la libertad de prensa global. El análisis de RSF señala que hay “un gran deterioro en el marco legal: se promulgaron numerosas leyes que castigan a los periodistas por delitos como “insulto al presidente”, “blasfemia” o “apoyo al terrorismo”. Como efecto secundario de esta alarmante situación, los comunicadores tienden cada vez más a la “autocensura”. Así, el indicador “ambiente y autocensura” muestra un empeoramiento de más de 10 por ciento entre 2013 y 2016.

Para 2015, según cifras mundiales, murieron 63 periodistas por ejercer su profesión¹¹ y otros 40 fueron asesinados de manera sospechosa, cifras a las que se suman las de 19 profesionales de la

⁸ Se utiliza cuando se pretende identificar el conjunto de características que constituyen un fenómeno jurídico, de tal manera que permita establecer relaciones o niveles entre ellas. Generalmente, este trabajo sirve de partida para los otros tipos de investigación.

⁹ Este método se emplea cuando se pretende evaluar y cuestionar una ley o institución jurídica vigente con el objeto de fortalecerla o proponer reformas legislativas que le permitan evolucionar o mejorar.

¹⁰ Este método se emplea cuando se pretende evaluar y cuestionar una ley o institución jurídica vigente con el objeto de fortalecerla o proponer reformas legislativas que le permitan evolucionar o mejorar.

¹¹ Muertos por su profesión: los periodistas son asesinados por las investigaciones o denuncias que vienen desarrollando.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

comunicación y seis colaboradores que perdieron la vida por causas relacionadas con la libertad de prensa¹². “Si bien, como es habitual, un gran número de estos fallecimientos se produjo en zonas de conflicto, una de las grandes novedades del informe es que el 64 por ciento de los periodistas que fueron asesinados en 2015 no estaban en países en guerra”¹³.

En el informe de RSF existe una relación directa entre la capacidad económica de un Estado con una libertad de prensa frágil. Es decir, y como lo sustenta el documento, *“los países exportadores de petróleo no son los guardianes de la libertad de información... Así, la riqueza de una nación no garantiza una prensa libre”* (RFS 2015).

En el escalafón realizado por Reporteros Sin Fronteras, países como Finlandia, Noruega y Dinamarca ocupan los tres primeros puestos, respectivamente, lo que quiere decir que son los Estados con mejor protección a la libertad de prensa, mientras que Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea son los últimos en el *ranking* mundial de RSF.

Asimismo, en 2015 la lucha contra el terrorismo yihadista tuvo un efecto directo y negativo sobre la libertad de prensa en el mundo. Según RSF y Amnistía Internacional, las campañas de seguridad nacional desplegadas desde los atentados de París y Bruselas¹⁴ están siendo utilizadas como “coartada” para limitar el trabajo de los periodistas.

Egipto es uno de los países donde más se ha restringido el derecho a la libertad de información, con 24 periodistas encarcelados. No obstante, Turquía también se ha convertido en la principal prisión de profesionales de la comunicación, y Rusia, donde la prensa está sometida al control del Estado, figura entre los países que ejercen un sistemático hostigamiento sobre la prensa independiente y el control de Internet (*Caracol Radio*, 2016). “En México, otro de los países sobre los que RSF llama la atención, ocho informadores fueron asesinados el año pasado pese a la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y

¹² Perder la vida por causas relacionadas con su oficio: no hay intención de matarlo, pero muere en un cubrimiento. Ejemplo: una protesta, un bombardeo, o situaciones similares.

¹³ LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN EL MUNDO EN 2015 (2016) tomado el 11 de mayo de 2016 en <http://www.informeannualrsf.es/>

¹⁴ El 13 de noviembre de 2015 y el 22 de marzo de 2016, un grupo terrorista atacó París y Bruselas, respectivamente, ocasionando entre los dos atentados 162 víctimas mortales.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Periodistas, y en lo que va del año han perdido la vida otros cuatro. En todos estos países, el miedo ha llevado a muchos profesionales al exilio o al abandono de su profesión. En otros casos, la autocensura, motivada por el miedo, ha deteriorado el periodismo libre”.

Según un informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en 2015,

“27 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron asesinados en la región en 2015 y varios más habrían sido desaparecidos o desplazados de sus lugares de trabajo, por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Además, otros 12 periodistas fueron asesinados sin a la fecha de cierre de este informe se hubiese aclarado o aportado elementos para determinar su posible vinculación con la profesión. A estos lamentables hechos se sumaron decenas de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios presuntamente vinculados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Es importante resaltar que, durante 2015, se produjeron también avances en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra periodistas en años previos e incluso ocurridos durante el año en curso. Esto demuestra que es posible investigar prioritariamente la línea vinculada al ejercicio profesional de estas víctimas y sancionar a los responsables. Pese a estos esfuerzos, buena parte de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad”.

La libertad de prensa, en conclusión, continúa amenazada, y llama la atención que en la mayoría de los casos, es el Estado quien viola este derecho. México, Rusia o Egipto son un ejemplo de abuso de poder y autoridad ante los periodistas que realizan su trabajo, igualmente la falta de garantías para investigar y procesar a los responsables de las violaciones es otra de las razones para señalar a varios países como responsables de la precaria situación de la libertad de prensa.

A continuación, se hará un panorama dividiendo los estados americanos, de los otros países. Este ejercicio se realiza con el fin de ir de una mirada macro a lo micro. Además, para evidenciar otras herramientas de protección, además de las que cuenta el sistema interamericano.

2.1. Marco jurídico provisto para la protección de la libertad de prensa a nivel internacional

Como se mencionó anteriormente, para hablar de la libertad de prensa tenemos que referirnos a la libertad de expresión, la que está declarada como un Derecho en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” .

Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados por lo que opinan. Representa la posibilidad de llevar a cabo investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras.

La libertad de expresión, como se explica en el artículo, está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación sin que el Estado, o cualquier otro ente, puedan ejercer un control antes de la emisión. Cumplir con el derecho a la libertad de prensa y de expresión supone obtener un estado democrático y justo, garante de protección por las diferentes opiniones, con mecanismos de denuncia ciudadana.

Los estudios sobre la libertad de expresión son innumerables y variados. Nacional e internacionalmente es un derecho de gran debate. Un referente internacional muy conocido es el caso presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la última tentación de cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile. 2001). Aquí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Chile por la censura que impidió la exhibición en ese país de la película “*La Última Tentación de Cristo*”.

De acuerdo como se presentó en los medios de la época: “Según la reclamación ante la CIDH, el Estado chileno está acusado de violar los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia consagrados en los artículos 12 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de la sociedad chilena y en particular de los demandantes”. Este caso es un

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

referente importante para el derecho de la libertad de expresión desde entes estatales. Allí se demostró cómo un Estado se puede convertir en el primer violador de los derechos, utilizando su poder para vetar y manipular la situación.

Al hablar específicamente de la **Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2000**, un tratado que amplía y detalla qué es y cómo debe ser este derecho, se presenta que “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática” (Organización de los Estados Americanos, 2016).

En todos los principios y párrafos del preámbulo, se explica no solo que la libertad de expresión es fundamental para un sistema democrático, sino “para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio” (Organización de los Estados Americanos, 2016). Asimismo, que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental.

Entre los principales instrumentos internacionales, se encuentran:

- *Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Artículo 10)*

En este Convenio se hace mención al derecho que todas las personas poseen para dar sus opiniones, a recibir o comunicar información o ideas, con las garantías de no ser limitadas en su derecho. Sin embargo, también se les da la facultad a los Estados de controlar la información y a las empresas encargadas de la comunicación, siempre y cuando sean necesarias las sanciones o limitaciones.

El artículo señala:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

- *Declaración Universal de los Derechos Humanos*

En la Declaración Universal se habla de todas las libertades que tienen las personas en el mundo (de conciencia, religiosa, palabra, creencia, entre otras). No obstante, el artículo 19 se refiere directamente a la libertad de expresión y opinión. “Es precisamente a través de una participación activa y pacífica de toda la sociedad en las instituciones democráticas del Estado en donde el ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta plenamente permitiendo mejorar la condición de los sectores marginados” (Organización de los Estados Americanos, 2015).

El artículo señala:

“Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- *Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)*

Así como la Declaración Universal de los DD.HH., aquí se presenta el derecho de cada persona a no ser molestada por sus opiniones, y a poder buscar, recibir y difundir información de cualquier índole; sin embargo, existen ciertas restricciones que la ley puede fijar para evitar que se vulneren otros derechos.

“Artículo 19:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

Con estos dos últimos artículos se expone un tema clave. A pesar de que la libertad de prensa es un derecho esencial para la democracia, esto no lo exime de los límites para no afectar otros derechos. Los periodistas deben recordar que su información debe ser veraz y cualquier comentario o investigación requiere confirmación de distintas fuentes. Una información errada puede llevar a la vulneración de otros derechos o poner en peligro la seguridad nacional.

Por su parte, es preciso mencionar la Observación general 34 (OG-34) del Consejo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión realizada en Ginebra, entre el 11 al 29 de julio de 2011. Esta OG-34 hace alusión a lo relativo al derecho al acceso a la información (tanto pública como de interés público) y la rendición de cuentas, la protección de datos personales, la participación política, la protección a periodistas, así como pluralidad informativa y radios comunitarias.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Allí, se sustenta, entre otras cosas, que el ejercicio del Derecho Humano a la libertad de expresión no sólo es imprescindible para el pleno desarrollo de toda persona, sino que es fundamental para una sociedad democrática. Por lo que es necesario que se delimiten con claridad sus alcances y posibles restricciones, para evitar que estas inhiban el ejercicio de este derecho fundamental. También es indispensable que este derecho (libertad de expresión) se actualice junto con los avances tecnológicos que tenga la humanidad.

Además, se encuentra el establecimiento claro de las restricciones posibles a la libertad de expresión, situación que permite sentar las bases para evitar la tentación autoritaria presuntamente fundamentada en la defensa del orden público. Igualmente se indica que la protección del derecho a la libertad de expresión consagrada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente en su inciso 2, protege todas las formas de expresión y los medios para su difusión. Estas formas comprenden la palabra oral y escrita y el lenguaje de signos, y expresiones no verbales tales como las imágenes y los objetos artísticos. Los medios de expresión comprenden los libros, los periódicos, los folletos, los carteles, las pancartas, las prendas de vestir y los alegatos judiciales, así como modos de expresión audiovisuales, electrónicos o de internet, en todas sus formas.

- *Derecho Internacional Humanitario*

Por el enfoque de la investigación de la tesis, es clave mencionar al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en cuanto se habla de periodistas en zona de conflicto. De acuerdo al DIH, se establece la obligación de respetar a los periodistas civiles asignados a conflictos armados y protegerlos contra cualquier forma de ataque intencional. El Derecho concede a los periodistas civiles la misma protección que a las personas civiles, siempre que no participen directamente en las hostilidades.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Según el artículo 79 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949¹⁵, los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado “serán considerados personas civiles; serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil”.

En la norma 34 del capítulo 10 del Estudio sobre el Derecho Internacional Humanitario consuetudinario realizado por el CICR en 2005, se establece que " los periodistas civiles que realicen misiones profesionales en zonas de conflicto armado serán respetados y protegidos, siempre que no participen directamente en las hostilidades " , y se observa que " la práctica de los Estados establece esta regla como una norma de Derecho Internacional Consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales ".

En todos los conflictos armados, el DIH prohíbe explícitamente los siguientes actos contra personas que no participan o que han dejado de participar activamente en las hostilidades: los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Véase el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.

Conviene poner de relieve que el corresponsal de guerra acreditado por las autoridades militares en el sentido del III Convenio de Ginebra es persona protegida, de la misma manera que el periodista no acreditado: mantiene su estatuto de persona civil, a pesar de la autorización especial que haya recibido de los militares. Igualmente, un periodista debe ser respetado, sea o no titular de una tarjeta de identidad para periodista en misión peligrosa. La tarjeta certifica el cometido de periodista; no fundamenta el estatuto de persona civil¹⁶.

¹⁵ Actualmente, 136 Estados son partes del Protocolo I, entre ellos Colombia y 126 del Protocolo II, del cual también es parte Colombia.

¹⁶ Véase art. 50, párr. 1, del Protocolo I, en el que se incluye al personal mencionado en el artículo 4 A 4 del III Convenio en su definición de personas civiles.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Sin embargo, si un periodista se acerca, o sigue a una unidad militar, puede perder, no su derecho a la protección que le confiere su estatuto de persona civil, sino su protección de hecho. Es decir, ya no podrá prevalerse de la protección que le es debida, pues dicha unidad es un objetivo lícito de ataque para el adversario (a no ser que la norma de la proporcionalidad prohíba el ataque - art. 51, párr. 5 b). El periodista actúa, entonces, por cuenta y riesgo propios. Se aplica el mismo razonamiento por lo que atañe al periodista que se aproxime a objetivos militares. En este caso, renuncia a la protección que le es debida.

Además, toda participación directa en las hostilidades supondría, evidentemente, la pérdida de la inmunidad de persona civil, durante tal participación (art. 51, párr. 3). La aplicación de esa disposición a la práctica diaria del periodista puede plantear delicados problemas. Está claro, al menos en teoría, que las actividades normales de un periodista son protegidas por la inmunidad que se le otorga. Los Estados aceptaron que los periodistas se beneficien del estatuto de persona civil, comprometiéndose, por ello, a admitir que ejerzan su profesión, fotografíen, rueden películas, graben o anoten. Por lo tanto, hay que insistir en la siguiente presunción: el periodista actúa dentro de los límites que se le asignen, hasta prueba de lo contrario. Si rebasa esos límites, se expone a que lo acusen de espionaje.

En el artículo 13 del Protocolo II, se dilucida la situación de la población civil como tal y de las personas civiles, individualmente consideradas, que se benefician de una protección absoluta. No pueden ser objeto de ataque. Esta norma de base del derecho de los conflictos armados, sin más, es la expresión de un principio general de derecho. Tiene un valor coercitivo, independientemente del Protocolo II.

En conclusión, el periodista se beneficia de toda la protección que en el derecho se estipula para las personas civiles en un conflicto armado internacional o no internacional. Por consiguiente, el periodista se beneficia de la misma protección que la gran mayoría de las personas que no participan en las hostilidades: la población civil.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- *Relatoría sobre libertad de expresión en la ONU*

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con un relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión¹⁷ designado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH), por resolución 1993/45 de 5 de marzo de 1993¹⁸.

El Relator Especial tiene la labor de:

- a) Reunir toda la información pertinente sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la discriminación, las amenazas o el uso de la violencia, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular, como cuestión de alta prioridad, contra periodistas u otros profesionales que trabajen en la esfera de la información, dondequiera que estos hechos ocurran;
- b) Recabar y recibir información fidedigna y fiable de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales y de cualesquiera otras partes que tengan conocimientos de esos casos, y responder a esa información;
- c) Formular recomendaciones y hacer sugerencias sobre los medios de promover y proteger mejor el derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus manifestaciones;
- d) Contribuir a la prestación de asistencia técnica o de servicios de asesoramiento por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de promover y proteger mejor el derecho a la libertad de opinión y de expresión.

En el desempeño de su mandato el Relator Especial:

¹⁷ Esta persona es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar e informar sobre la situación del país o a un determinado tema de Derechos Humanos. Esta posición es honorario y el experto no es personal de las Naciones Unidas ni pagado por su trabajo. Los Relatores Especiales son parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

¹⁸ Desde 1993, la relatoría, el CDH ha prorrogado el mandato del Relator Especial por un período adicional. La última prórroga se dio el 21 de marzo de 2017, por tres años más. De acuerdo con el mandato por la resolución 7/36 del CDH.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

a) Transmite llamamientos urgentes y cartas de denuncia a los gobiernos interesados sobre supuestos casos de discriminación, amenazas y actos de violencia y hostigamiento, incluso persecución e intimidación, contra profesionales en la esfera de la información que tratan de ejercer o de promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

b) Realiza visitas a los países

c) Presenta anualmente un informe sobre sus actividades y métodos de trabajo al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General.¹⁹

2.2. Estado de la Libertad de prensa en los estados americanos

En una mirada más regional, Reporteros sin Fronteras determinó la situación de América como “catastrófica”. Según el informe anual de la organización “31 casos de periodistas asesinados en América Latina, en 2016, son un saldo lo suficientemente fuerte para hablar de un balance catastrófico en la situación de la libertad de información en el continente americano. Un cálculo que se explica por la falta de mecanismos de protección o por las deficiencias de estos, pero, sobre todo, por el alarmante grado de violencia, corrupción e impunidad en la mayoría de los países de la zona, que se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo para el ejercicio de la profesión periodística. Así como en 2015, México sigue a la cabeza de la lista negra, con 13 asesinatos. Le siguen Guatemala (8), Brasil (4), Honduras (3) y Venezuela, Perú y El Salvador con un asesinato cada uno”.

Según el periodista mexicano Darío Ramírez, en América Latina la violencia y amenazas contra los periodistas es constante. La mayoría de comunicadores se ven obligados a abandonar su oficio o cambiar y modificar la verdad que informan. Estos casos se ven en territorios de conflicto, específicamente, en espacios donde el narcotráfico es latente. *“Se ha probado que el contexto de la violencia contra la prensa es complejo y, por ello, merece una respuesta integral. Esto se traduce*

¹⁹ Organización de las Naciones Unidas, Derechos Humanos. Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Tomada el 17 de noviembre de 2017 en <http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

en reconocer la responsabilidad compartida de los diferentes actores: Estado, medios y periodistas y la sociedad. El trabajo de cada uno es vital para encontrar respuestas y eventualmente soluciones” (Ramírez, 2010).

Un sistema que no realice un trabajo íntegro de juzgamiento desencadena los problemas que hoy se siguen presentando con la libertad de prensa. Sin embargo, es importante resaltar que durante 2015, el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, señaló que “se produjeron también avances en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra periodistas en años previos e incluso ocurridos durante el año en curso. Esto demuestra que es posible investigar prioritariamente la línea vinculada al ejercicio profesional de estas víctimas y sancionar a los responsables. Pese a estos esfuerzos, buena parte de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad”.

Para esto, entre las recurrentes recomendaciones de la Relatoría se centraron:

“Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los comunicadores, incluida la condena pública a todo acto de agresión, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los y las periodistas, el respeto del derecho de los y las periodistas a la reserva de las fuentes de información; el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad y, si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión, la determinación de sanciones adecuadas de manera proporcionada al daño cometido; así como la elaboración de estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas”(OEA, 2015).

Las recomendaciones son precisas y recuerdan a los Estados su labor de defensores de los derechos, y no de violadores; un camino que aún falta por entender y aplicar.

2.2.1. Marco jurídico provisto para la protección de la libertad de prensa en los Estados Interamericanos

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Ante las constantes amenazas al periodismo mundial, el “marco jurídico provisto por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos se consagra como el más garantista entre los diversos sistemas regionales existentes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 da un altísimo valor a la libertad de expresión. Así lo hacen también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –artículo IV–, y la Carta Democrática Interamericana –Artículo 4” (OEA, 2016).

Este nivel especial de protección tiene como fundamento los conceptos de dignidad y autonomía de la persona humana entendidos de manera amplia, y parte del reconocimiento de la libertad de expresión no solo como un derecho derivado de la autonomía humana, sino de su valor instrumental para el ejercicio de los demás derechos fundamentales y de su función esencial dentro de los regímenes democráticos.

Es decir, la libertad de prensa y expresión van más allá del nivel innato de los derechos fundamentales, asimismo, trasciende hasta el punto público para lograr una sociedad más equitativa y transparente.

A continuación, se presenta el marco jurídico que poseen los organismos de protección sobre la libertad de expresión y prensa en América:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo IV. Año 1948

Aquí, los Estados americanos se comprometen a velar por la protección de los derechos del Hombre (entendido en general para hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes). A partir de 1948 varios Estados firmaron en Bogotá, Colombia, la Declaración, considerando, entre otras cosas, “Que la protección internacional de los Derechos del Hombre debe ser guía principalísima del Derecho Americano en evolución”.

En el capítulo primero de la declaración, el artículo IV expresa, específicamente, que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. En este artículo cabe aclarar que los organismos internacionales han

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

afirmado que no se requiere de un título profesional o de educación para ejercer el derecho a dicha libertad. Cualquier persona con alguna opinión o información podrá ejercer su derecho a la libertad de prensa, siempre y cuando no atente contra la integridad de la persona de forma malintencionada y fuera de los parámetros que la jurisprudencia ha estipulado²⁰.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13 de 1969

En la Convención, el tema de la libertad de prensa es más profundo que en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El artículo 13 de la Convención expresa:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

²⁰ Este punto se desarrollará en el capítulo de jurisprudencia de esta tesis.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

De acuerdo con lo anterior, así como toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y prensa, es indispensable que el Estado vele por ese derecho; también que evite cualquier clase de censura o abuso de poder. Además, es importante aclarar que la misma persona tiene el deber de evitar información que incite a la guerra o cualquier hecho de odio, algo que no aplica en el ejercicio de la comunicación y la información como tal.

En esta Convención la Libertad de Expresión se entiende como un todo para lograr la igualdad en el desarrollo de sus opiniones, información y comunicados.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo IV)

En este artículo se presenta el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. Según la Declaración, los Estados Americanos “han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.

El artículo asegura:

“Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Carta Democrática Interamericana (Artículo 4)

El derecho a la libertad de prensa y expresión es fundamental para cualquier democracia. Con estos derechos, es posible que la sociedad conozca y pueda opinar de los hechos que les incumben. Es evidente que la libertad de expresión y de prensa sea uno de los artículos de la Carta Democrática, pues este derecho es fundamental para un ejercicio completo de igualdad. El artículo presenta:

“Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

En esta Declaración se presenta concretamente la importancia de la libertad de expresión como derecho innato de todos los pueblos. Aquí es importante destacar que es uno de los instrumentos internacionales que nombra la libertad de prensa específicamente. Allí se afirma que “la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información...”.

Este instrumento es de gran valor para la protección del derecho, y un insumo destacable entre los otros instrumentos que velan por la libertad de expresión y de prensa.

Específicamente, en esos principios se presenta que, la libertad de prensa es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. También se señala que, toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como se debe

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación.

Igualmente, en los principios se señala que personas poseen el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. Sobre el acceso a la información en poder del Estado, se dice que sólo se admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

Por su parte, al referirse a la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.

Sobre el tema del periodismo como profesión, los principios son contundentes. Allí se señala que, toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

Asimismo, la Declaración recalca que el comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. También, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, es una clara violación los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

En cuanto las leyes de privacidad, se dice que no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. Es importante señalar que la Declaración también hace alusión que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

Por último, se presenta que la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

Entre las interpretaciones más destacables de los principios de la Declaración, y que llama la atención para el desarrollo de esta investigación, está el **principio 6**²¹. En este se entiende que “el periodista profesional no es otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Por tanto, la colegiación obligatoria conduce a limitar en forma permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención Americana y el principio aquí analizado, lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que la misma se fundamenta” (CIDH, 1995).

Sobre este tema, la Corte Interamericana de DD.HH. ha señalado:

“Los argumentos acerca de que la colegiación es la manera de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común. Pero en realidad como ha sido demostrado, el bien común reclama

²¹ Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad” (CIDH, 1995).

Es decir, toda persona, con o sin título, puede ejercer su derecho a la libertad de prensa, así haya o no estudiado para esto. Además, aclara que un periodista es un sujeto que ejerce su derecho, el cual debe ser respetado bajo todas las garantías que se han consagrado en la libertad de expresión.

Los Principios también tocan un tema importante: La reserva con la que cuentan los comunicadores sobre sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Precisamente está en esa reserva la base misma de la veracidad, la democracia y la transparencia. Cuando alguien tiene conocimiento y pruebas de que en su entidad o empresa se cometen irregularidades, malos manejos de recursos públicos, financiación ilegal de campañas o pagos de coimas a funcionarios, y quiere que eso se conozca, acude a la prensa porque sabe que gracias a ella amplifica su denuncia mientras garantiza su anonimato.

Relatoría para la libertad de expresión en la CIDH

Desde 1997, durante el período de sesiones número 97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creó una oficina especial de carácter permanente, con independencia funcional y estructura operativa propia. Con esto, la CIDH buscó la defensa en América del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. De acuerdo con la CIDH, el papel fundamental de la Relatoría es la consolidación y desarrollo del sistema democrático, así como en la protección, garantía y promoción de los demás derechos humanos.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

La Relatoría Especial ha contado con el respaldo no solo de los Estados, sino de las organizaciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, los periodistas y, principalmente, las personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que ha representado un apoyo importante para el restablecimiento de las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos y para asegurar las justas reparaciones que amerite la situación (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2016).

La Relatoría, como se explica en el brochure de la oficina, tiene como mandato general la realización de actividades de protección y promoción del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluyen la asesoría a la CIDH la evaluación de casos y solicitudes de medidas cautelares, así como en la preparación de informes; realización de las visitas in loco a los países miembros de la OEA para profundizar la observación general de la situación y/o para investigar una situación particular referida al derecho y presta asesoría técnica a los órganos de la OEA.

Realiza actividades de promoción y educación, visitas a los distintos Estados miembros de la OEA, informes específicos y temáticos. Promueve la adopción de medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; coordina acciones de verificación y seguimiento de las condiciones del ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión en los Estados miembros con las defensorías del pueblo o las instituciones nacionales de derechos humanos.

Asimismo, elabora un informe anual sobre la situación en las Américas, el cual será considerado por el pleno de la CIDH para la aprobación de su inclusión en el Informe Anual a la Asamblea General.

En síntesis, la Relatoría es un elemento indispensable para la que libertad de expresión se cumpla y que los Estados sean garantes de su defensa. No se queda en la asesoría, sino que también avanza en la capacitación, promoción y educación, con un punto crucial como lo es el informe anual que evidencia el avance o retroceso del derecho.

2.2. Herramientas de protección para la Libertad de Prensa

Como se ha descrito, hay una estrecha y determinante relación entre la libertad de expresión y prensa. Sin la primera no podría existir la segunda, y sin ninguna de las dos no existiría una verdadera democracia. Por esto, se exige una amplia protección del derecho, que como se explicó, se encuentra en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3.2.1. Medidas provisionales de la Corte Interamericana ²²

La “Corte Interamericana ha fijado criterios sobre la indispensable protección tanto en opiniones consultivas como en sentencias correspondientes a litigios tramitados ante su jurisdicción. También se ha ocupado de esta materia en la emisión de medidas urgentes y provisionales dictadas conforme a las atribuciones preventivas que posee la Corte tanto en lo que concierne a casos sujetos a su conocimiento, como en lo que corresponde a asuntos que aún no se hallan sometidos a éste, cuando la Comisión Interamericana requiere dichas medidas en los términos de la legitimación exclusiva que le confiere, para este fin, la Convención Americana. A través de medidas de este carácter se ha protegido la libertad de pensamiento y expresión”²³. Al respecto, es preciso tomar en cuenta que la propia Corte ha reconocido que las medidas provisionales poseen un doble designio: cautelar, para asegurar el procedimiento, su materia y sus sujetos, y tutelar, para la preservación de derechos fundamentales (Ramírez, 2007).

La Corte Interamericana toma como base la gravedad y urgencia del hecho o la situación, así como examina la posibilidad de que se cause un daño irreparable, por lo que se adopta la medida **provisional** necesaria. “Cabe decir que en diversas hipótesis –entre ellas las relacionadas con el derecho a la libertad de expresión– la Corte ha extendido el alcance subjetivo de las medidas provisionales, con sentido garantista, a fin de que sus beneficios lleguen a personas que no se hallan

²² Las medidas provisionales son aquellas acciones que se imparten desde la Corte Interamericana de DDHH. A diferencia de las cautelares que se dan por parte de la Comisión Interamericana de DDHH.

²³ *Caso del Periódico La Nación*; *Caso Marta Colomina y Liliana Velásquez*; *Asunto diarios El Nacional y Así es la Noticia*; *Asunto de la emisora de televisión Globovisión*; *Asunto Luisiana Ríos y otros (Radio Caracas Televisión-RCTV)*.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

individualizadas en el momento de emitir la medida, pero son identificables, conforme a criterios objetivos de apreciación, por su pertenencia a un grupo que enfrenta riesgos graves o por su vinculación con aquél. Así, por ejemplo, la condición de trabajadores de un medio de comunicación”²⁴.

3.2.2. Medidas cautelares en la Relatoría para la Libertad de Expresión en la CIDH

A diferencia de la Corte, la Comisión cuenta con medidas cautelares. Este mecanismo se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. En consecuencia, el número de medidas cautelares otorgadas no refleja el número de personas protegidas mediante su adopción; como se puede observar, muchas de las medidas cautelares acordadas por la CIDH extienden protección a más de una persona y en ciertos casos a grupos de personas como comunidades o pueblos indígenas. Asimismo, el Reglamento indica que el otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables. El primero de agosto entró en vigor el Reglamento modificado de la CIDH y establece que “las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamentadas” (OEA, 2016).

La Relatoría Especial colabora con la CIDH a través de recomendaciones para la adopción de medidas cautelares en materia de libertad de expresión. Las medidas cautelares se originan en la necesidad de adoptar mecanismos que eviten un perjuicio grave, inminente e irremediable a las personas sujetas a la jurisdicción de algún Estado o al objeto del proceso en conexión con una

²⁴ IBID

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

petición o caso pendiente ante la Comisión Interamericana (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2016).

Según el último informe de la Relatoría, en 2015 el organismo colaboró en el estudio de 29 solicitudes de medidas cautelares. Entre algunos casos en lo corrido de los años de acción de la Relatoría estuvieron: Herrera Ulloa con Costa Rica²⁵; López Ulacio con Venezuela²⁶; Globovisión con Venezuela²⁷; Comunicadores de la Voz de Zacate Grande con Honduras²⁸ y 15 trabajadores de Radio Progreso con Honduras²⁹.

2.3. Jurisprudencia en América

De acuerdo con la jurisprudencia de la CIDH y la Corte Interamericana, la libertad de pensamiento y expresión están estrechamente ligadas a la democracia de cada Estado.

Allí se ha explicado que ese derecho, “*es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Se ha precisado que para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otras personas, como el derecho a difundir las propias creencias o informaciones*” (OEA, 2013). También se ha enfatizado que un determinado acto de expresión implica, simultáneamente, las dos dimensiones, por lo que limitar el derecho a la libertad de expresión

²⁵ Decisión de la CIDH del 1º de marzo de 2001, solicitando al Estado de Costa Rica que adopte medidas cautelares a favor del periodista Mauricio Herrera Ulloa y el representante legal del periódico *La Nación*, quienes habían sido condenados penal y civilmente en virtud de la publicación de reportajes contra un funcionario diplomático costarricense, sin que al momento de adopción de las medidas se hubiesen materializado plenamente dichas condenas.

²⁶ Decisión de la CIDH de 7 de febrero de 2001, solicitando al Estado de Venezuela que adopte medidas cautelares a favor del periodista Pablo López Ulacio, quien había acusado a un empresario de beneficiarse de contratos de seguro estatales en el contexto de una campaña presidencial. El periodista fue objeto de una orden judicial de detención y prohibido de mencionar públicamente al empresario en el diario *La Razón*.

²⁷ Decisiones de la CIDH de 3 y 24 de octubre de 2003, solicitando al Estado de Venezuela que suspenda las decisiones administrativas de incautar algunos equipos operativos de la estación de televisión *Globovisión*, y que se garantice un juicio imparcial e independiente en el caso.

²⁸ Decisión de la CIDH de 18 de abril de 2011, en la que se solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los comunicadores de *La Voz de Zacate Grande*, y que concertara las medidas a adoptarse.

²⁹ Ampliación de medida cautelar. Decisión de la CIDH de 25 de mayo de 2012 en la que se solicitó al Estado de Honduras informar a la CIDH sobre la concertación con los beneficiarios de la implementación de la MC 399/09, que protege a varios trabajadores de *Radio Progreso* en Honduras, desglosada de la MC 196/09 el 1 de abril de 2011.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

influye en los daños cuando se desea difundir una idea o una información y al mismo tiempo afecta el derecho de los miembros de la sociedad a conocer esa idea o información.

La igualdad también se vería seriamente agredida. Según la CIDH, “el derecho a la información y a recibir la mayor cantidad de opiniones o de informaciones diversas, exige un esfuerzo especial para lograr el acceso en condiciones de igualdad y sin discriminaciones de ningún tipo al debate público. Esto supone condiciones especiales de inclusión que permite el ejercicio efectivo de este derecho para todos los sectores sociales”³⁰.

Por esto, los organismos internacionales han trabajado por ampliar los conceptos que se tienen al respecto de la libertad de prensa y expresión, para evitar que se siga afectando el derecho y reforzar la doctrina y la jurisprudencia interna.

Según la OEA, estas muestran la forma como distintos tribunales nacionales han implementado los estándares regionales en el derecho interno. Asimismo, algunas de las decisiones que se mencionan son pioneras en avances fundamentales en materia de libertad de expresión y han constituido puntos obligados de referencia no solo para las cortes y tribunales de otros Estados, sino para los órganos del sistema regional (OEA, 2009).

Cabe aclarar que según ha señalado la Corte Interamericana en el Caso Tristán Donoso vs. Panamá, la titularidad del derecho a la libertad de expresión no se puede restringir a determinada profesión o grupo de personas, ni al ámbito de la libertad de prensa: la *“Convención Americana garantiza este derecho a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe considerarla ni restringirla a una determinada profesión o grupo de personas. La libertad de expresión es un componente esencial de la libertad de prensa, sin que por ello sean sinónimos o el ejercicio de la primera esté condicionado a la segunda”*³¹.

³⁰ CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión. OEA/Ser.L/V/II/CIDH/RELE/INF.4/09. 25 de febrero de 2009. Párr. 15. Disponible en: <http://www.cidh.org/pdf%20files/Un%20agenda%20Hemisferica%20espanol.pdf>

³¹ Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 114.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Para el desarrollo de esta tesis, solo se tomará la jurisprudencia que se basa, específicamente, en la libertad de expresión de periodistas o medios de comunicación.³² En algunos casos se hablará de libertad de expresión, pues es el nombre del derecho como tal, pero su enfoque, como se mencionaba, será en torno de personas que ejerzan su derecho por medio de una labor propia del periodismo.

2.3.1. Jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hechos

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la imposición de una condena por difamación en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar esta medida.

El periodista del periódico La Nación de Costa Rica, Mauricio Herrera Ulloa, publicó el 19, 20 y 21 de mayo de 1995, un grupo de artículos donde Herrera vinculaba al delegado ante la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Félix Przedborski, algunas conductas ilícitas. Cuatro días después del último artículo del periodista, Przedborski publicó en el mismo medio un artículo donde daba su versión de los hechos.

Przedborski interpuso dos querellas contra el periodista por los delitos de difamación, calumnias y publicación de ofensas. Asimismo, ejerció una acción civil resarcitoria contra Herrera Ulloa y contra el periódico La Nación.

El 29 de mayo de 1998 se emitió una sentencia que absolvió a Herrera Ulloa por ausencia del dolo requerido para la configuración de los tipos penales de los delitos. El abogado de Przedborski interpuso un recurso de casación. El 7 de mayo de 1999 la Sala Tercera de la

³² La tesis, más allá del derecho a la libertad de expresión, va enfocada a la eficacia del Estado para defender el derecho de los periodistas amenazados para continuar su oficio.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la sentencia casada. El 12 de noviembre de 1999 se emitió una sentencia condenatoria en contra del periodista y contra el medio por publicar los artículos “difamatorios”, en carácter de responsable civil solidario. El 3 de diciembre de 1999 el defensor del querellado y apoderado del Periódico, junto al periodista implicado interpusieron dos recursos de casación contra la sentencia condenatoria, las cuales fueron declaradas sin lugar el 24 de enero de 2001.

Conclusión

La Corte dio por archivado el caso el 22 de noviembre de 2010, al determinar que Costa Rica cumplió con la totalidad de reparaciones. En este caso se evidencia cómo un Estado puede perjudicar a los periodistas con leyes que no cumplen con los convenios, tratados, protocolos, y otros instrumentos internacionales. El periodista costarricense fue objeto de varias acusaciones por parte del Estado que llegaron a la autocensura. Aquí se demuestra los constantes daños en contra que los periodistas asumen por su papel de denunciantes.

Caso Globovisión vs. Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Perozo y otros vs. Venezuela)

Hechos

Este caso se presentó ante la Corte por una serie de actos y omisiones ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 2005 en Venezuela, cuando un grupo de funcionarios públicos y otras personas particulares realizaron actos hostiles (agresiones físicas y verbales) y obstaculizaron las labores periodísticas de 44 personas (periodistas, personal técnico asociado, empleados, directivos y accionistas) vinculadas al canal de televisión *Globovisión*. La Corte Interamericana consideró que los pronunciamientos de altos funcionarios públicos y la omisión de las autoridades estatales en su obligación de actuar con la debida diligencia en las investigaciones por hechos de violencia contra los periodistas, constituyeron faltas a las obligaciones estatales de prevenir e investigar los hechos. La Corte Interamericana ordenó al Estado conducir eficazmente las investigaciones

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

y procesos penales por hechos de violencia contra los periodistas, así como la adopción de “las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio de su libertad de buscar, recibir y difundir información”.

Conclusiones

En esta sentencia, la Corte recordó la importancia de respetar y hacer respetar la libertad de expresión de los periodistas. Entre las consideraciones, se dijo que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares. En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad³³ y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación, así como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen”³⁴.

Es así que se entiende que el Estado debe velar por la protección del derecho, además de hacer cumplir las normas que lo protegen, por medio de medidas preventivas o protectoras depende del caso. No solo basta con que existan las leyes, sino que deben existir condiciones y prácticas sociales que favorezcan el desarrollo de la libertad de prensa y expresión.

³³ Cfr., inter alia, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03. Serie A No. 18, párr. 112-172; Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra nota 22, párr. 173- 189.

³⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Perozo y otros vs. Venezuela sentencia de 28 de enero de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf

Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos³⁵

Hechos

Los hechos del presente caso se refieren al señor Jorge Carpio Nicolle, periodista y político muy conocido en Guatemala, fundador del diario *El Gráfico* y del partido político Unión del Centro Nacional (UCN). La edición de *El Gráfico* de 26 de mayo de 1993, en la que el señor Jorge Carpio Nicolle expresó una visión crítica respecto del autogolpe del señor Serrano Elías, fue censurada por el Estado. La UCN también condenó el autogolpe y rechazó la ruptura del orden constitucional, lo que ocasionó que miembros de esta fueran intimidados por la policía y las fuerzas militares.

El 3 de julio de 1993, durante una gira proselitista en los departamentos de Totonicapán, Huehuetenango y El Quiché, el señor Jorge Carpio Nicolle y su comitiva fueron interceptados por más de 15 hombres armados que cubrían sus rostros con pasamontañas. Al identificar al señor Jorge Carpio Nicolle, los hombres armados le dispararon a quemarropa, ocasionándole heridas graves que posteriormente le provocaron la muerte.

En los mismos hechos fueron asesinados el señor Juan Vicente Villacorta Fajardo, quien viajaba en el mismo vehículo que el señor Jorge Carpio Nicolle, así como los señores Alejandro Ávila Guzmán y Rigoberto Rivas González, quienes lo hacían en una camioneta de doble cabina junto con el entonces menor de edad Sydney Shaw Díaz, quien resultó gravemente herido. Sydney Shaw Díaz, la señora Martha Arrivillaga de Carpio y los señores Sydney Shaw Arrivillaga, Mario Arturo López Arrivillaga y Ricardo San Pedro Suárez, sobrevivieron a este atentado. Se interpusieron una serie de recursos. Sin embargo, no se investigó sobre los hechos ni se sancionó a los responsables.

Conclusiones

³⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004 <http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/carpionicolle.pdf>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Este caso evidencia los problemas de los periodistas al sentar su opinión en temas como la política. Es evidente que las investigaciones periodísticas enfocadas a la corrupción, o como se presenta en este caso, a situaciones de orden político, son una de las causales de amenazas contra los comunicadores. Amenazas que no solo se traducen en hostigamientos, sino también a demoras en las investigaciones y vicios en los procesos judiciales.

No obstante, en este caso se señala el común de varias situaciones de daño hacia el periodismo: la impunidad. Esta falta de acciones judiciales efectivas en casos de daños al periodismo, y el archivamiento de los hechos han generado que los daños contra los servidores de los distintos medios de comunicación sean constantes y sus condenas sean escasas.

2.3.2. Jurisprudencia interna en Estados Americanos

A pesar de que algunos casos de infracción al derecho de la libertad de expresión y prensa han llegado al sistema interamericano, hay jurisprudencia interna de algunos Estados que es importante analizar y reconocer ante la defensa del derecho.

A continuación se presentan los casos más relevantes para el desarrollo investigativo de esta tesis³⁶. Cabe resaltar que los siguientes ejemplos presentados son hechos concretos que demuestran cómo las buenas prácticas y correcto desarrollo de la jurisprudencia interna logran la defensa efectiva de la libertad de prensa:

Brasil

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, en sentencia de 30 de abril de 2009³⁷, reconoció que la prensa tiene con la democracia una “relación arraigada de interdependencia o retroalimentación”.

³⁶ Los casos presentados son ejemplos concretos que demuestran cómo las buenas prácticas y correcto desarrollo de la jurisprudencia interna logran la defensa efectiva de la libertad de prensa.

³⁷ Supremo Tribunal Federal de Brasil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 130 - Distrito Federal. Sentencia de 30 de abril de 2009. Disponible en:

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Este Estado explicó que la Carta Magna de ese país asigna a la prensa el derecho a controlar y revelar los asuntos relacionados con la vida del Estado y la sociedad misma, por lo que renunciar a la libertad de prensa equivale a renunciar al conocimiento general de los asuntos relacionados con el poder, sea político, económico, militar o religioso.

Este pronunciamiento del Supremo Tribunal de Brasil respondió a la Ley de Prensa, aprobada durante el régimen militar y que les imponía duras penas a los periodistas por los delitos de difamación e injurias, permitía la censura previa y establecía otras medidas restrictivas del ejercicio de la libertad de expresión. De acuerdo con la sentencia, la ley era incompatible con la Constitución Federal.

Brasil realizó una extensa explicación sobre el alcance y la importancia de la libertad de expresión en un régimen democrático, tomando, entre otras fuentes, los estándares interamericanos. En este fallo el Supremo Tribunal Federal de Brasil consideró que la libertad de prensa es una manifestación de las libertades de pensamiento, información y expresión con una relación intrínseca con la democracia, que amerita que deba disfrutar de una protección reforzada para asegurar su plena libertad de acción. Al respecto, recalcó que la prensa es una instancia natural de formación de la opinión pública y una alternativa a la versión oficial de los hechos. En este sentido, el pensamiento crítico dentro del periodismo forma parte integrante de la información plena y fidedigna. Este criterio fue reiterado por el alto tribunal en sentencia de 2 de septiembre de 2010³⁸.

Argentina

La Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso Quantín, Norberto Julio c/Benedetti, Jorge Enrique y otros s/ derechos personalísimos (en sentencia de 30 de octubre de 2012); otorgó protección constitucional a la emisión de opiniones a través de la radio. De acuerdo con la Corte,

<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=605411&idDocumento=&codigoClasse=776&numero=131>

³⁸ Supremo Tribunal Federal de Brasil. Sentencia de 2 de septiembre de 2010. Medida Cautelar en Acción Directa de Inconstitucionalidad ADI-4451. Disponible en: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2613221>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

las opiniones, por más “chocantes o dolorosas para el receptor”, deben ser toleradas para impulsar un debate social amplio y democrático, necesario para una sociedad de derecho.

En el caso, la Corte Suprema examinó la legitimidad de una condena civil por daños y perjuicios impuesta por la emisión de expresiones que se señalaban como “injuriosas y calumniosas” en contra de un exfuncionario público. Lo primero que observó el alto Tribunal es que era necesario precisar si se trataba de expresiones en las que “prima la afirmación de hechos (aseveraciones fácticas) o si, por el contrario, se est[aba] en presencia de otras en las que prevalecen las ideas, las opiniones, los juicios críticos o de valor, o, por qué no, las conjeturas y las hipótesis”³⁹. Al respecto, la Corte estimó que las expresiones podrían ser una gran exageración, pero no imputaban “ningún hecho ilícito concreto y que, por tanto, no deben someterse al test de veracidad, por cuanto se limitan a adjudicar [al actor] determinada ideología” y reiteró que conforme a la jurisprudencia interamericana, en temas de interés público, la libertad de expresión protege la manifestación de ideas que “chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”⁴⁰.

Aquí se reafirma que los funcionarios públicos, en su deber de transparencia y anticorrupción, son blancos de críticas necesarias por parte de la sociedad. Estas críticas deben estar sustentadas en hechos verídicos y no malintencionados.

México

Uno de los temas que genera varios pronunciamientos son las acusaciones por difamación por parte de los periodistas. En la sentencia de 17 de junio de 2009⁴¹, la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia mexicana señaló que la difamación, o “malicia” como se nombra específicamente en un comunicado, “exige que la expresión que alegadamente causa un daño a la reputación de un funcionario público haya sido emitida con la intención de causar ese daño, con conocimiento de

³⁹ Corte Suprema de Justicia de Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2012. “Quantín, Norberto Julio c/ Benedetti, Jorge Enrique y otros s/ derechos personalísimos”. Disponible en: <http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=693527>

⁴⁰ IBID

⁴¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Amparo Directo en Revisión 2044-2008, de 17 de junio de 2009. Disponible en: <http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/08020440.010.doc>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

que se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia respecto de la revisión de la aparente veracidad o falta de veracidad de los mismos. De otro modo las personas podrían abrigar el temor de poder incurrir de un modo totalmente inadvertido para ellas en responsabilidad por la emisión de expresiones o informaciones, lo cual podría llevarlos, directa o indirectamente, a restringir abruptamente el ejercicio de sus derechos a expresarse o informar”.

Con esto se define que la libertad de prensa y expresión es un derecho a opinar y presentar ante la sociedad ciertos asuntos públicos que requieren discusión. No se puede violar este derecho por el simple malestar del “acusado” en la investigación.

Uruguay

Los casos sobre “real malicia” son recurrentes. En la sentencia No. 161 emitida el 2 de junio de 2010 por el Tribunal de Apelaciones en lo penal del Uruguay⁴²; el tribunal revocó la condena impuesta al director responsable del semanario “Tres Puntos” de Paysandú por delito de difamación con ocasión de dos artículos en los que cuestionó la vinculación de la Policía de esa región del país con actos de corrupción. Según el tribunal, los hechos debían ser examinados “en función de la ‘real malicia’ del autor de la publicación, que es la exigida legalmente para superar el umbral de la responsabilidad penal”. Al respecto consideró que el denunciado estaba exento de responsabilidad, ya que conforme esta doctrina “las notas no reflejan y el denunciante no lo probó conforme a su carga legal, que la intención del autor fuera la “de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada”. Para el tribunal “el periodista propaló información verosímil respecto al funcionario público según se probó y, además, no surge que haya tenido intención de descalificar o vulnerar la vida privada del funcionario con real malicia”. Finalmente, el tribunal expresó que en cuestiones de interés público el régimen legal vigente en ese país impone al denunciante la carga de probar que el periodista actuó a sabiendas de que el hecho atribuido era falso o solo tenía el propósito de agraviar a la persona o su vida privada” (OEA, 2013).

⁴² Tribunal de Apelaciones en lo Penal del Uruguay. Sentencia No. 161 de 12 de julio de 2010. Autos caratulados: COELHO JURIOLO—Ricardo José. Denuncia Ley 16.099 c/ MORALES BARTABURO, Rodrigo. I.U.E.: 30257/2009.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Con esto se entiende que la real malicia no es demostrable hasta que se descubra que la persona actuó con impulsos de dañar al acusado personalmente. Si una persona desea opinar y acusar está en su derecho, siempre y cuando sea una denuncia sin intenciones más allá de informar un hecho de interés público.

Guatemala

Ejercer la libertad de prensa no es un asunto solo de los periodistas. Según la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo IV), para expresar un pensamiento, opinión, investigación, entre otros, públicamente, no se requiere ser profesional o tener estudios al respecto. Esta situación se vio reflejada en Guatemala, cuando la Corte Interamericana en la citada opinión consultiva OC 5/85, la Corte de Constitucionalidad de ese país, en sentencia de 24 de agosto de 2010⁴³, resolvió la acción de amparo promovida por el Vicepresidente Constitucional de la República de Guatemala que perseguía se dejara sin efecto la sentencia judicial que rechazó su querrela interpuesta por los delitos de calumnia, injuria y difamación que sostiene se cometieron con ocasión de una columna de opinión publicada en un periódico. Uno de los argumentos esgrimidos por el accionante durante el proceso judicial fue que la autora de la columna no aparecía en los registros del Colegio Profesional de Humanidades y que en razón de esto no procedía aplicar el procedimiento contemplado en la Ley de Emisión del Pensamiento, sino que se debía aplicar el procedimiento común (OEA, 2013).

Decidiendo la improcedencia de la acción de amparo, la Corte sostuvo como uno de los fundamentos de su decisión que “la libertad en la emisión del pensamiento por ser un derecho inherente a la persona no requiere para su ejercicio poseer un grado académico en periodismo”.

3. Estado de la libertad de prensa en Colombia

4.1. Marco Jurídico de Colombia

⁴³ Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Expediente 863-2010 de fecha 24-08-2010. Disponible en: <http://www.cc.gob.gt/documentosCC/ResolucionesIntPub/863-2010%2024-08-2010.pdf>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Para Rodrigo Uprimny, en su texto **‘Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992 - 2005)’**, *“la libertad de información es uno de los derechos más importantes en una democracia constitucional, pues no solo asegura elementos básicos de la libertad individual, sino que además un presupuesto del propio proceso democrático. Por otro lado, es claro que se trata también de un derecho complejo, pues colisiona en forma permanente con otros derechos y bienes fundamentales”*. En una mirada más profunda al análisis del autor, se comprende que en Colombia existen fortalezas, pero también insuficiencias y debilidades jurisprudenciales. Contar con las normas no es suficiente, sino hay garantías.

Para corroborar la afirmación de Uprimny, a continuación, se hará un breve recuento de las leyes internas que existen para la protección de la libertad de expresión y algunas sentencias pertinentes para el análisis.

3.1.1. Leyes

En la Constitución Política de Colombia existen varios artículos que protegen la libertad de expresión⁴⁴. Sin embargo, para el desarrollo de esta tesis, se tomarán con más minucia los relacionados con la libertad de prensa y con las medidas de protección a los periodistas para determinar si el Estado cumple con los requerimientos necesarios para que estos continúen su ejercicio profesional a pesar de las amenazas por su oficio:

El **Artículo 20** de la Constitución de 1991 es la Ley que implica, específicamente, el desarrollo del periodismo. De acuerdo con este artículo: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se

⁴⁴ **Artículo 18:** Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

Artículo 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Artículo 21: Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.

Artículo 109: El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Según lo citado, la libertad de expresión es el derecho de todo individuo a expresar ideas libremente y, por tanto, sin censura. Este es un derecho fundamental defendido bajo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la mayoría de los sistemas democráticos también lo señalan. De esta deriva la libertad de imprenta⁴⁵.

El **Artículo 73** de la Constitución expresa: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”. De acuerdo con este artículo, y muy de la mano del Artículo 20 de la Constitución, es deber del Estado garantizar la independencia de los periodistas a presentar la información, y de proteger ese ejercicio de comunicación.

Por otra parte, el **Artículo 74** señala que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”. Esta ley se refiere al acceso a la información pública que todo ciudadano tiene derecho, más allá de su profesión periodística. Sin embargo, para lograr entregar una información veraz y sustentada, los comunicadores sociales se valen de este artículo para alcanzar esas metas. La libertad de información y de opinión es un derecho que influye en todos los demás derechos fundamentales. Es la materia prima que reafirma la condición del ciudadano y legitima la democracia. El derecho a la información es la base misma de la opinión y el motor del debate.

Hablando específicamente de **protección**, la Constitución Política de Colombia, en su artículo segundo, les ordena a las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, entre los cuales, la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal, cobran especial relevancia ya que permiten el disfrute de los demás derechos. Con esto, es indispensable que el Estado ofrezca mecanismos de protección a todas las personas, entre las que se incluyen a los periodistas, una de las poblaciones con mayor índice de amenaza.

⁴⁵ Sin embargo, existen restricciones que implican que este derecho llega hasta que vulnera al del otro, e igualmente está prohibido hacer propaganda a favor de la guerra (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Como se observa, Colombia cuenta con varios mecanismos para garantizar la protección de los periodistas. Así como señala Uprimmy en su afirmación inicial, es claro que la libertad de prensa se trata también de un derecho complejo, pues colisiona en forma permanente con otros derechos y bienes fundamentales.

3.1.2. Jurisprudencia en Colombia

A continuación se presentan las sentencias de las altas cortes en relación con la libertad de expresión, enfocada al periodismo:

La Corte Constitucional de Colombia examinó “la protección diferenciada que se otorga a la emisión de opiniones o juicios de valor”. En el fallo C-417/09 de 26 de junio de 2009 indicó de manera general que “la opinión, salvo que se ejerza con un propósito explícito y efectivo de ofender y causar un daño real sobre alguien o que suponga la inclusión de discursos no protegidos por la libertad, [...] es y debe ser libre, porque, en un Estado democrático y pluralista, fundado entre otros, en la dignidad de la persona humana, teniendo en cuenta que la opinión se trata de un punto de vista, de un criterio, una percepción de la realidad derivada del ejercicio de otras libertades fundamentales como las de pensamiento, conciencia y cultos, tiene que ser respetada y protegida ampliamente, aun cuando contenga expresiones consideradas ingratas, ofensivas o perturbadoras para el Estado o para las personas y la población. Es decir, que distinto de la afirmación sobre hechos que se presentan a través del ejercicio de la libertad de información o prensa, llamados a tener respaldo en la realidad, cumplir con los requisitos constitucionales de la veracidad e imparcialidad o con la responsabilidad social en el caso de los medios, la opinión en cambio es una idea, un parecer o forma de ver el mundo, que de hallarse injusta o impertinente, debe combatirse con otras opiniones o pareceres, no con sanciones de ninguna índole, menos aún penales”⁴⁶.

Aquí se resalta un punto de vista, criterio o percepción de la realidad derivada del ejercicio de otras libertades fundamentales como las de pensamiento, conciencia y cultos. Estas deben ser respetadas y protegidas por el Estado, en vez de juzgadas y señaladas negativamente.

46 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-417/09, de 26 de junio de 2009. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-417-09.htm>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

En Colombia también se debatió sobre la Jurisprudencia relacionada con la reserva de la fuente. En interpretación del artículo 13 de la Convención Americana, el Principio 8 de la Declaración de Principios señala expresamente que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia T-298/09 de 23 de abril de 2009⁴⁷, falló una acción de tutela interpuesta por un congresista que solicitaba la rectificación de un artículo publicado en un periódico que lo vinculaba con hechos de corrupción, basados en una carta anónima. En relación con la reserva de la fuente, la Corte declaró que se trata de “una garantía fundamental y necesaria para proteger la verdadera independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de información relevante para el público”. La Corte señaló que “en principio y mientras el legislador estatutario no establezca una disposición clara, razonable, necesaria y proporcionada en sentido contrario, la reserva garantizada por el artículo 74 de la Carta no está sometida a limitaciones. Cualquier restricción que se pretenda imponer a dicha garantía carece en la actualidad del soporte normativo de estirpe estatutaria requerido”.

Refiriéndose al conflicto entre la reserva de la fuente y los derechos de terceros, la Corte manifestó que “en algunas circunstancias resulta necesaria la reserva de la fuente incluso cuando ello puede comprometer derechos de terceros de buena fe”. Aquí se entendió que ocultar las fuentes se convierte en una garantía para que el periodismo “valiente e independiente” pueda realizar su trabajo, sin consecuencias de afectar a la fuente. En la sentencia se presentó el ejemplo de algunos casos “en los que están involucradas organizaciones macrocriminales o mafiosas, que no tienen escrúpulos a la hora de intimidar a una fuente para que omita revelar información que puede afectar sus intereses”. En la sentencia se aclara también que, “... en principio las normas éticas y profesionales ordenan a los medios ofrecer al público toda la información de la que disponen, salvo que se trate de casos extraordinarios en los cuales existe confianza en la fuente, riesgos latentes y la información sea de relevancia pública. En estos casos, a los periodistas se les exige una mayor

⁴⁷ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1677149 de 23 de abril de 2009. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-298-09.htm>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

diligencia en la confrontación y valoración de la información, pero no se les puede exigir que revelen la fuente”.

En la jurisprudencia sobre libertad de expresión y prensa también existen casos de malas prácticas periodísticas. Entre algunos ejemplos se encuentran las sentencias:

La T-602 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz): En esta tutela se pide rectificación por divulgarse información inexacta en un noticiero de televisión. En su decisión, la Corte le otorga la razón al accionante y ordena la rectificación.

T-277 del 2015 (M. P. María Victoria Calle Correa): Un ciudadano solicitó al juez de tutela que protegiera sus derechos fundamentales al buen nombre, intimidad, debido proceso, petición y al trabajo, que consideró lesionados por parte de la Casa Editorial El Tiempo, luego de que en una de sus publicaciones informara de la captura y posterior vinculación de la accionante a un proceso penal por el delito de trata de personas.

En su decisión, la Corte ordenó a El Tiempo que actualice la información publicada en su página web respecto de los hechos que relacionan a la accionante con el delito de trata de personas, de tal manera que se informe que la misma no fue vencida en juicio.

Concluye la corporación que la libertad de expresión se deriva de que este derecho no solo faculta a las personas para manifestar sus ideas y opiniones, y para transmitir información, sino que también protege que el contenido expresado se difunda y llegue a otros. “Imponer responsabilidades a los intermediarios de Internet por los contenidos transmitidos limitaría de forma importante la difusión de ideas por este medio de comunicación, pues les daría el poder para regular el flujo de información en la red” (Ámbito Jurídico, 2016).

Ahora bien, cabe resaltar algunas sentencias que han velado por la protección de los periodistas en zonas de conflicto. Por ejemplo, la Sentencia T-234 de 2012, en forma general, asegura la protección del derecho a la seguridad personal. Aquí se presenta a defensores de derechos humanos,

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, entre otros, como un grupo de personas que por su actividad misma están expuestas a un nivel de amenaza mayor.

La Corte Constitucional precisó que la solicitud de protección del derecho a la seguridad personal, exige al peticionario probar, al menos de manera sumaria, los hechos que demuestran o permiten deducir que se encuentra expuesto a una amenaza. Es por ello, que debe acreditar la naturaleza e intensidad de la amenaza respecto de la cual se pide protección; y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o especial exposición a la materialización del inicio del daño consumado. Esto conlleva, por parte de las autoridades competentes, a identificar el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la consumación de un daño, especialmente cuando se trata, como sería el caso de los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado, personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión.

Con este pequeño panorama sobre la jurisprudencia, es posible determinar que ejercer la libertad de expresión y prensa acarrea una gran responsabilidad. El periodista se debe regir por las buenas prácticas profesionales y evitar poner en riesgo su vida o integridad; sin embargo, también está claro que factores como el conflicto armado generan complicaciones al oficio. La jurisprudencia presenta casos donde se señala la protección especial a los periodistas, al ser blanco fácil de amenazas.

4.2. Herramientas de Protección

Colombia cuenta con la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad estatal que recibe las solicitudes de protección de todas las personas amenazadas en general (líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, periodistas, políticos, entre otros)⁴⁸. Está adscrita al Ministerio del Interior

⁴⁸ De acuerdo con el decreto 4065, la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad encargada de velar por la protección de todas las personas, por medio de ciertos mecanismos y rutas de acción para evitar al máximo la

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

y, específicamente, se encarga de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.⁴⁹

Según la normativa de la UNP, esta se encarga de recibir las solicitudes de protección de cada grupo o persona que se sienta amenazada⁵⁰, analizarlas y verificar si existe un riesgo real u ordinario. De acuerdo con las categorías que se manejan, las personas pueden tener tres tipos de niveles: el primero, es el ordinario. Este riesgo es el de cualquier persona que puede estar expuesta a un daño como un robo o algún delito menor⁵¹. Le sigue el riesgo extraordinario que consiste en un daño que puede recibir una persona o un grupo que por su actividad laboral recibe amenazas y requiere de atención especial. Por último, se encuentra el riesgo extremo. Este lo define la Unidad

vulneración de los derechos. A pesar de que el decreto ha sido modificado en varias ocasiones, como con el decreto 4912 del 2012, la tarea de la UNP siempre es la misma.

⁴⁹ La UNP tiene como funciones, definidas por el Decreto 4065 de 2011 en su artículo 4:(1) Articular y coordinar la prestación del servicio de protección con las entidades competentes a nivel nacional y territorial. (2) Definir, en coordinación con las entidades o instancias responsables, las medidas de protección que sean oportunas, eficaces e idóneas, y con enfoque diferencial, atendiendo a los niveles de riesgo identificados. (3) Implementar los programas de protección que determine el Gobierno nacional, de competencia de la Unidad, dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal. (4) Hacer seguimiento y evaluación a la oportunidad, idoneidad y eficacia de los programas y medidas de protección implementadas, así como al manejo que de las mismas hagan sus beneficiarios y proponer las mejoras a que haya lugar. (5) Brindarles de manera especial protección a las poblaciones en situación de riesgo extraordinario o extremo que le señale el Gobierno nacional o se determine de acuerdo con los estudios de riesgo que realice la entidad. (6) Realizar la evaluación del riesgo a las personas que soliciten protección, dentro del marco de los programas que determine el Gobierno nacional, de competencia de la Unidad, en coordinación con los organismos o entidades competentes. (7) Realizar diagnósticos de riesgo a grupos, comunidades y territorios, para la definición de medidas de protección, en coordinación con los organismos o entidades competentes. (8) Apoyar y asesorar técnicamente a las entidades del nivel territorial, que tienen competencia en la materia de protección, en el diseño e implementación de estrategias para salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de personas, grupos y comunidades, especialmente, en situación de riesgo extraordinario o extremo. (9) Aportar la información necesaria a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para la formulación de los lineamientos generales para el diseño e implementación de la política en materia de prevención y protección a cargo del Ministerio del Interior. (10) Apoyar al Ministerio del Interior, con recursos humanos, técnicos, logísticos y administrativos, en la implementación de las acciones de prevención, a fin de salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de personas, grupos y comunidades, que se encuentran sujetas a la jurisdicción del Estado colombiano, siguiendo las directrices que para tal efecto brinde el referido Ministerio. (11) Administrar el sistema de información de protección. (12) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la entidad.

⁵⁰ Generalmente han existido ciertos grupos específicos en constante vulnerabilidad que la UNP ya tiene diagnosticados, los cuales se han dividido en: Defensores de DD.HH., profesores, dirigentes políticos, líderes comunales, testigos de algún delito, misiones médicas y periodistas, entre otros.

⁵¹ Es aquel al que están sometidas todas las personas, en igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad; genera para el Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad pública y no comporta la obligación de adoptar medidas de protección.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

como “aquel que se presenta al confluir todas las características señaladas para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e inminente”⁵² (UNP, 2015). De acuerdo con el reglamento, solamente para el riesgo extraordinario o extremo, la UNP otorga un esquema de seguridad, que varía según el nivel que exista.

En 2014, la UNP recibió solicitudes de protección de 309 desmovilizados; siete de líderes políticos de la oposición; 356 de líderes sindicales; 384 de defensores de DD.HH.; 233 de líderes de grupos étnicos; 169 de docentes; 74 de periodistas y 875 de víctimas. De acuerdo con la entidad, recibir una solicitud no abarca la obligación de ceder un esquema de seguridad o que sea una amenaza “real”.

De estas solicitudes, como se explicaba, algunas son aprobadas y se trasladan al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (Ctrai), encargado de llevar a cabo todo el trabajo de campo, para la convalidación de la información con las entidades competentes y el diligenciamiento del Instrumento Estándar (Matriz de riesgo) de Valoración de Riesgo (IEV) concebido por la Corte Constitucional mediante el Auto 266 de 2009⁵³. (UNP, 2014).

Cuando el caso ha pasado los primeros filtros y se determina una amenaza, este debe ser tratado en la sesión del Grupo de Valoración Preliminar (GVP). Allí hay una participación de nueve entidades, cinco de carácter permanente y cuatro como invitados especiales, quienes en conjunto analizan la situación de riesgo de cada caso de acuerdo con la información que suministra el Analista de Evaluación del Riesgo del Ctrai para presentar el concepto de nivel de riesgo emitido en materia de medidas idóneas ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).

⁵² Es aquel donde las personas, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar y comprender el derecho de recibir del Estado la protección especial por parte del Programa, respecto de su población y siempre que reúna las características contenidas en la Sentencia T-719/03, numeral 4.2.3.1. “Caracterización de los riesgos frente a los cuales protege el derecho a la seguridad personal”.

⁵³ El IEV consta de tres variables: amenaza, riesgo y vulnerabilidad, las que se diligencian de acuerdo con las actividades de campo efectuadas por el analista en el sitio y la aplicación de los criterios emitidos por la Corte Constitucional en las diferentes sentencias en lo relacionado con el tema de seguridad personal. El instrumento pondera el riesgo así: Extremo desde 81%, Extraordinario desde 51 hasta 80% y Ordinario hasta 50%

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Al pasar el caso a este último; el cual está compuesto por 13 entidades, cinco miembros permanentes y ocho entidades invitadas, tiene como objeto llevar a cabo la valoración integral del riesgo, así como la recomendación de medidas de protección y acciones complementarias, teniendo en cuenta el concepto y las recomendaciones del GVP y los insumos que aportan los delegados de las instituciones que lo conforman en el marco de sus competencias para la decisión de la adopción de las medidas o las posibles acciones complementarias que se requieran de acuerdo con el tipo de población atendida. Así, el Cerrem toma una decisión final respecto del caso, que es notificada al Director de la Unidad Nacional de Protección mediante acta, con el propósito de implementar, de manera inmediata, las medidas de protección al peticionario (UNP 2016).

Para el caso específico para la protección de los periodistas, el Cerrem y la UNP se encargan de analizar la situación de riesgo de los periodistas en condiciones de vulnerabilidad e implementan las medidas de protección aprobadas por el Cerrem (FLIP, 2013).

Los miembros que integran el Cerrem y tienen voz y voto son⁵⁴: El Director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien lo presidirá o su delegado; el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, o quien haga sus veces, o su delegado; el Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o su delegado; el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, o su delegado; y el Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional, o su delegado.⁵⁵

Dentro de los delegados para analizar los casos de los periodistas, asisten al Cerrem organizaciones de prensa como la FLIP, Andianos, Fecolper y Asomedios. Organizaciones que tienen voz, pero

⁵⁴ Este grupo es igual para todos los análisis de riesgo. No específicamente para periodistas.

⁵⁵ También hay unos invitados permanentes que solo tienen voz: Un delegado del Procurador General de la Nación; Un delegado del Defensor del Pueblo; Un delegado del Fiscal General de la Nación; Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur, cuando se trate de casos de población desplazada; Cuatro delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa de Prevención y Protección, quienes estarán presentes, exclusivamente, en el análisis de los casos del grupo poblacional al que representan; Delegados de entidades de carácter público cuando se presenten casos relacionados con sus competencias; Representante de un ente privado, cuando el Comité lo considere pertinente.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

no voto. La responsabilidad de brindar las medidas de protección recae únicamente sobre las entidades del Estado competentes y no sobre las organizaciones de prensa (FLIP, 2013).

El tiempo desde que una solicitud entre al sistema de la UNP, hasta que sale apta para entregar un esquema de seguridad varía dependiendo el caso y la urgencia del mismo. Sin embargo, generalmente está entre un mes (Recalcando que dependiendo de la situación, puede ser menor el tiempo). Hay que resaltar que las medidas provisionales y cautelares que son ordenadas por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos también entran a evaluarse por parte de la UNP, pero son resueltas de forma inmediata y excepcional.

Asimismo, si un periodista se encuentra en riesgo inminente, el Director de la UNP podrá solicitar de manera excepcional, y sin necesidad de aprobación previa por el Cerrem, medidas de protección para el periodista en riesgo.

Estas medidas son temporales y se revisan periódicamente. Cuando la UNP determina que la amenaza ha disminuido o se ha acabado, ordenará el desmonte gradual de las medidas de protección.⁵⁶

Evaluación a la UNP

De acuerdo con un análisis realizado por Know How Asesores sobre la Medición del nivel de satisfacción de los Beneficiarios de la UNP en el 2015⁵⁷, se logró concluir que es evidente que la UNP tiene diferentes críticas: una de las más importantes es la demora en las respuestas. Esto se debe a todos los trámites que se exigen para cumplir y poder acceder a los esquemas de protección; situación que puede generar daños a los solicitantes. Esto se suma, según los encuestados, a los problemas de comunicación y falta de información.

⁵⁶ El Cerrem realiza, como mínimo, una sesión mensual. En algunos casos se llevan a cabo reuniones extraordinarias cuando se presenta algún caso de riesgo inminente para algún grupo determinado o en alguna región específica del país.

⁵⁷ La encuesta se realizó a los beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección en el año 2015 (9.397 en todo el país)

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

“De forma general la percepción de calidad sobre los servicios que presta la entidad desmejoró en el año 2015. Entre los protegidos por la UNP no son claros los medios de comunicación para presentar sus denuncias, piensan que los trámites son muy demorados para entregar las respectivas respuestas, lo cual se ha reflejado en la pérdida de confianza y seguridad de los protegidos hacia la entidad. [...]”

A nivel de regiones, según la encuestadora, se estableció que la UNP desarrolla una función buena según sus beneficiarios, pero las regiones menos satisfechas, durante la evaluación, fueron Andina y Caribe, quienes calificaron negativamente aspectos del proceso de protección en mayor medida.

El Cerrem y el proceso de implementación de medidas, se llevan la calificación más deficiente. Según las cifras de Know How Asesores, en promedio los beneficiarios por regiones consideran que son deficientes en 22 y 18%, respectivamente.

Según la firma encuestadora, es importante que la UNP examine los procesos de evaluación de riesgos y la entrega de información de las medidas. Asimismo, se recomienda revisar si las medidas implementadas en las regiones se ajustan a sus características socioeconómicas y demográficas, para garantizar el éxito de las mismas en el territorio. Esto se debe a otra de las mayores críticas hacia las medidas de protección: la UNP generaliza y estandariza muchos de los esquemas de protección, olvidando que cada territorio tiene diferentes dinámicas.

Para la FLIP, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) y la Organización Internacional Reporteros sin Fronteras (RSF), la gestión de la UNP es criticable. El 12 de agosto de 2015 las organizaciones hicieron un fuerte llamado de atención a la Unidad al asegurar que se han registrado casos de corrupción, además de otros problemas estructurales, que ahondan las grietas y el deterioro en la protección de los comunicadores sociales.

“La ausencia de justicia en los casos de amenazas contra la prensa incrementa el riesgo de los periodistas de todo el país. La Fiscalía conoce hace años la importancia de investigar las amenazas y sabe que la justicia es la medida más eficaz de protección, sin embargo, no

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

*brinda resultados. Se trata de un círculo vicioso en el que la impunidad se oculta tras la imagen de una protección ineficiente y que perpetúa el riesgo”*⁵⁸, se asegura en el comunicado.

Este llamado de atención se une a los resultados de un sinnúmero de investigaciones que determinan a la corrupción como uno de los mayores obstáculos y al Estado como uno de tantos agresores para la libertad de prensa. Y, más allá de las investigaciones, están las cifras que no mejoran. Según la FLIP, en su informe del 2016, “El 2015 fue el año más violento de los últimos seis para la prensa, se registraron 147 ataques que dejaron 232 periodistas víctimas. Este último número representa un incremento de un 39 por ciento frente al 2014”.

Con este panorama, es evidente señalar que a pesar de las acciones del Estado, los comunicadores no retoman su profesión, o se ven obligados a la autocensura, entre otros tipos de afecciones contra su oficio (desplazamiento, dejación de la profesión, etcétera) (FLIP, 2014)⁵⁹.

4.2.1. Situación nacional del periodismo

La situación de la libertad de prensa en Colombia no es diferente a la mayoría de países latinoamericanos. Según la FLIP, desde 1999 ha auxiliado a más de 1.500 periodistas en riesgo, siendo la amenaza y la agresión las más recurrentes en el país en el transcurso de la historia. Desde 1998, que la FLIP ha monitoreado la situación de la libertad de expresión en Colombia, se les ha hecho un llamado a los gobiernos respectivos para lograr una verdadera protección del oficio periodístico.

Sin embargo, a pesar de los llamados desde diferentes organizaciones nacionales e internacionales (FLIP, Comité de Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana

⁵⁸ FLIP (2015), Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) y la Organización Internacional Reporteros sin Fronteras (RSF). **Periodismo en Riesgo**. Recuperado el 10 de febrero de 2016

<http://flip.org.co/sites/default/files/pronunciamentos/PERIODISMO%20EN%20RIESGO.pdf>

⁵⁹ Como comentario propio de la tesis, se evidencia que la UNP solo interviene cuando hay un riesgo de amenaza, pero no cuenta con las herramientas de prevención, hecho que podría ayudar a la disminución de amenazas.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

de Prensa, entre otros), la situación de amenaza de los comunicadores parece no cambiar. De acuerdo con la investigación, en 2009, del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana:

“en Colombia la libertad de prensa permanece en estado crítico, y su evolución ha sido negativa durante los últimos diez años. Un alto porcentaje de periodistas está amenazado de muerte; a los tradicionales actores armados que amenazaban (guerrilla y paramilitares) se han sumado, como factor de riesgo, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en algunas regiones para asesinar y amenazar al periodismo; y los gobiernos nacional, regionales y locales a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa, se convirtieron en factor desestabilizador del ejercicio periodístico por medio de presiones y sutiles manipulaciones” (Gómez-Giraldo, J. C, 2009).

Según la apreciación que allí se presenta, los riesgos del periodismo en el país logran desestabilizar la verdad y el derecho de todos los colombianos a conocerla. Asimismo, y como la mayoría de investigaciones lo exponen, los grupos ilegales y agentes representativos del Estado son los principales agresores.

En el contexto más actual y de acuerdo con algunos análisis que realiza Reporteros sin Fronteras, en el 2015 Colombia ocupaba el lugar 128 entre 180 países. En el 2016 ocupó el 134.

“La situación de la libertad de información sigue degradándose en Colombia. Ejercer una actividad periodística en el país sigue siendo muy peligroso. Las ‘Bacrim’ (bandas criminales nacidas del movimiento paramilitar), como ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’ y ‘las Águilas Negras’, al igual que las bandas de delincuentes (combos) –en ocasiones en complicidad con las autoridades–, intentan hacer callar a los periodistas que les molestan. Los medios de comunicación alternativos o comunitarios que investigan temas delicados son los que corren mayor peligro. El asesinato de Luis Carlos Cervantes dos semanas después de que le retiraran la escolta que le habían asignado es un hecho trágico que muestra la urgencia de que se implementen programas de protección más eficaces y adaptados a las necesidades de los periodistas, en los que se estudien los riesgos que estos corren. La reanudación de las negociaciones de paz entre las autoridades colombianas y

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se llevaron a cabo bajo vigilancia: una célula de inteligencia militar, dirigida al parecer por el gobierno colombiano, interceptó más de 2.600 correos electrónicos intercambiados entre los portavoces de las FARC y periodistas colombianos y extranjeros. Una práctica que se inscribe en la misma línea que las ‘Chuzadas’, escuchas telefónicas ilegales efectuadas durante el mandato de Álvaro Uribe (2002 – 2010)” (RSF, 2015).

Para lo corrido del primer semestre de 2016, Colombia subió 4 posiciones de la clasificación mundial de RSF (RFS, 2016). Así como en 2015, los periodistas colombianos se encontraban, y se encuentran, bajo la amenaza permanente de las “bacrim”, bandas criminales compuestas por paramilitares implicadas en el tráfico de droga. Agresiones, amenazas de muerte y asesinatos ubican a Colombia entre los países que aumentaron sus índices violaciones del derecho internacional en materia de libertad de información en el continente americano. Organizaciones criminales como “Los Urabeños” o “Los Rastrojos” buscan acallar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios que las investigan. Las agresiones con frecuencia son cometidas en complicidad con los políticos locales y la mayoría permanecen impunes (RSF, 2016).

4.2.2. Situación regional del periodismo en zonas con conflicto armado

En una mirada local, distintos análisis han señalado una marcada diferencia en la protección de periodistas regionales. Según el investigador del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), Camilo Andrés Tamayo, los ataques a la libertad de prensa en Colombia se centran en los periodistas y medios regionales. “Se puede observar que el ejercicio del periodismo es mucho más peligroso para las personas que viven fuera de las grandes ciudades del país, pero que desgraciadamente no logran movilizar la misma atención pública que cuando estos hechos les suceden a periodistas más reconocidos nacionalmente”. Aquí se presenta un asunto importante: para los comunicadores regionales, a pesar de ser los más amenazados, sus situaciones de vulnerabilidad no son tenidas en cuenta de la misma forma como sí lo son las amenazas contra periodistas de alguna ciudad capital de Colombia. Esto implica no solo la indiferencia de la sociedad, sino de las leyes y la forma como se exige el cumplimiento de los derechos.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

El modo como se representan los hechos o sucesos del conflicto armado devela dinámicas muy riesgosas para los comunicadores, pero la falta de atención de la sociedad hacia sus periodistas locales las oscurece aún más (Tamayo, 2005).

Esta reflexión es compartida por el estudio realizado en 2003 por Medios para la Paz, titulado “*La guerra, una amenaza para la prensa*”. Allí se señala que los problemas de los periodistas regionales son muchos: la presión y persecución, por parte de los actores de la guerra, los conflictos de interés en las relaciones con las diversas fuentes, las dificultades crecientes para llevar una cobertura adecuada de las confrontaciones, la necesidad de atender diferentes trabajos para poder obtener ingresos que les permitan sobrevivir, las tensiones que se derivan de la situación de pluriempleo y las dificultades que experimentan en su trabajo con los editores centrales, son las piezas de este rompecabezas periodístico regional.

A pesar de que las afirmaciones de Tamayo y de Medios para la Paz se llevaron a cabo hace más de 10 años, la situación actual de amenaza a los periodistas no mejora. Entidades nacionales también han llamado la atención por la falta de garantías que tienen los comunicadores para ejercer sus derechos. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) lanzó en diciembre de 2015 *La Palabra y el Silencio*, un informe que reúne los últimos 38 años de violencia en Colombia contra los periodistas y sus medios de comunicación. Según el Centro, los comunicadores, especialmente los de región, son víctimas de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y agentes desleales del Estado, quienes por medio de amenazas y atentados criminales, han intentado silenciarlos y, en muchos casos, lo han logrado (CNMH, 2015).

De acuerdo con el CNMH, quien basó sus datos con los informes de la FLIP, “entre diciembre de 1977 y agosto de 2015 fueron asesinados 152 por las labores que realizaban con motivo de su oficio; otro buen número recibió amenazas de muerte y varios se exiliaron”.

“La primera víctima de la que se tiene conocimiento es Carlos Ramírez París, director de Radio Guaymaral, quien fue asesinado el 11 de diciembre de 1977 en el puente Calderón de Cúcuta, por dos policías a golpes. Ese debut también marcó una característica que de allí

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

en adelante acompañaría a los demás asesinatos de periodistas: la impunidad, pues meses después los uniformados fueron dejados en libertad”.

Las acciones contra la libertad de prensa han “tenido repercusiones directas no solo en el campo del periodismo sino en la vida democrática de la nación” y “le han hecho un daño inmenso a la producción y circulación de la información en el ámbito público y al desarrollo de la convivencia y la vida social”, como lo señala el CNMH.

La impunidad se hace presente en varias páginas del informe. Según las cifras, cuatro de los 152 asesinatos han sido identificados y procesados los autores materiales e intelectuales. El 48 por ciento de los casos ya prescribieron; y la otra mitad se encuentra en diferentes estados procesales, pero con pocas esperanzas de que prosperen.

Este análisis se divide en diferentes épocas que han marcado la violencia hacia la Libertad de Prensa: La preparación de la violencia (1977-1985); El ascenso de la violencia narcotraficante (1986-1995); Actores armados ilegales, conflicto y violencia contra periodistas (1996-2005) y Descensos y ascensos en la violencia contra periodistas (2006-2015). En este recorrido por la historia se refleja cómo el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares, las bandas emergentes criminales y el Estado han sido recurrentes en los daños hacia los profesionales del periodismo y medios de comunicación.

La Palabra y el Silencio finaliza con el factor común entre todas las épocas analizadas: la corrupción como “comportamiento que atraviesa todos los momentos del conflicto interno colombiano y une a todos los actores en su proceder violento contra medios y periodistas: la corrupción. Ya sea porque los actores han infiltrado a importantes instituciones del estado nacional, regional y local o sea porque el desencadenante de la violencia contra periodistas es su denuncia de actos de corrupción. A tal punto que, en los últimos años, los promotores fundamentales de esta violencia provienen de la conjunción de la corrupción y las bandas delincuenciales”, concluye el informe.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

A las investigaciones sobre el periodismo de región, se suma el análisis de Fecolper, “Impactos de la violencia contra periodistas en el marco del conflicto armado”, publicado en 2015. En este texto, se evidencia una clara relación entre las amenazas hacia periodistas, y el conflicto armado. De acuerdo con la información que allí se presenta, “La mayoría de las violaciones a los derechos humanos contra periodistas, ocurridas en el marco del conflicto armado y al margen de él, han tenido lugar en departamentos y regiones en donde se desarrolla con mayor intensidad la dinámica de confrontación armada o en donde priman poderes fácticos de orden político, económico y armado”.

Al anterior punto, se suma el hecho de que las condiciones de conflicto armado han generado mayores limitaciones a los periodistas de región para continuar con su oficio informativo. Para ello, los periodistas han optado por la autocensura en las noticias, ante todo a las relacionadas con el conflicto armado.

Fecolper, así como el investigador Tamayo y del CNMH, enfatizan en el hecho que este daño al periodismo y a la libertad de prensa responde a la indiferencia nacional sobre los problemas regionales. *“Por su cercanía a los contextos de la afectación de los medios y periodistas regionales no siempre se ha hecho visible a nivel nacional. Los medios de comunicación nacional generalmente no hacen eco de las realidades locales de violencia en que los periodistas ejercen la intensa violencia política y armada, los medios locales y regionales son más vulnerables a sufrir agresiones, presiones o persecuciones por los actores del conflicto y la guerra.”*, señala la investigación.

En una agrupación por regiones que Fecolper hace sobre la situación del periodismo en región (ver apéndice 1), se puede concluir que dependiendo de las regiones varía el tipo de amenaza contra los periodistas y el actor que genera estos perjuicios; sin embargo, los principales daños son similares: censura, autocensura, desplazamiento y el deterioro de la calidad de vida. Asimismo, el conflicto armado es el detonante de la violencia contra los periodistas. Ya sea que las amenazas provengan desde alguno de los grupos armados ilegales o desde el Estado, el conflicto armado se vuelve una amenaza real y directa para el ejercicio mismo del periodismo regional.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

“Resulta indiscutible que la violencia contra periodistas se ha concentrado en las regiones. La mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos contra periodistas, ocurridas en el marco del conflicto armado y al margen de él, han tenido lugar en departamentos y regiones en donde se desarrolla con mayor intensidad la dinámica de confrontación armada o en donde priman poderes fácticos de orden político, económico y armado” (Fecolper, 2015).

Cabe recordar que estos hechos de violencia no solo afectan al periodista (su familia o círculo social más cercano) o al medio; también a la sociedad en su conjunto, pues el miedo impulsa a la exclusión de temas relacionados con el conflicto armado en la agenda mediática, lo que a su vez implica la existencia de una sociedad menos o mal informada.

4. Casos específicos de periodistas amenazados por su oficio en Colombia⁶⁰

A continuación, se presentarán dos casos de periodistas amenazados por su profesión en dos territorios afectados por el conflicto armado. Carmen Rosa Pabón es la protagonista de uno de estos casos. Ella es periodista de Arauca con más de 40 años de experiencia profesional. Por otra parte, está Sonia Godoy, periodista del Cauca con más de 15 años de trabajo periodístico.

A pesar de que son historias situadas en regiones diferentes, hay varias similitudes en sus casos:

- Cada una recibió protección del Estado para continuar su oficio.
- Aún tienen riesgo de amenazas por parte de actores activos en el conflicto armado colombiano.
- Las dos periodistas son las corresponsales de la FLIP en su territorio. Esto indica que son las responsables de alertar de cualquier tipo de amenaza o situación que afecten a los colegas de sus departamentos.

⁶⁰ Este análisis de casos se realiza con el propósito de afirmar o negar la hipótesis de esta Tesis: “El Estado colombiano parece que no cumple con las medidas necesarias de protección para que los periodistas amenazados, específicamente en región, desarrollen la libertad de prensa en territorios con conflicto”. Asimismo, se comparará con los informes, estudios, publicaciones y afirmaciones que se han presentado en lo corrido de esta tesis.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- Las primeras amenazas fueron registradas en una misma época (entre el 2000 al 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe).

En este último punto es importante señalar que las amenazas contra Carmen Rosa inician en el 2000, mientras que las de Sonia Godoy en el 2002. Para el 2000, Álvaro Uribe Vélez ya era el presidente de Colombia⁶¹. De acuerdo con Fecolper en su informe del 2015, en el 2000 se presentaba un contexto sociopolítico importante por el auge y la consolidación territorial del paramilitarismo. La permeación en estructuras institucionales del Estado en el orden local, regional y nacional también se señala como un hecho de gran relevancia desde ese año. “Eso significó un aumento de las violaciones a derechos humanos contra la población civil, que se ha mantenido en muchas regiones con posterioridad a los procesos de desmovilización que tuvieron lugar entre mediados y finales de la década, mediante la mutación en Bandas Criminales - BACRIM. Se suma a este contexto, el desarrollo de operaciones militares de gran envergadura por parte de las Fuerzas Armadas como Plan Colombia, Plan Patriota, entre otras”, puntualiza el informe de Fecolper.

En términos mediáticos, en este periodo algunos medios de comunicación se vincularon de forma más estrecha a las lógicas de la confrontación armada, a través de prácticas como: “alineamiento al lenguaje gubernamental frente al conflicto, reproducción de discursos sobre el conflicto que resultaban legitimadores de la violencia de algunos actores armados, publicación de informaciones oficiales como única fuente de información, sin mediación de procesos de investigación o contrastación, que en algunos casos antecedían a posteriores agresiones como asesinatos, amenazas o judicializaciones” (Fecolper, 2015).

También se buscó desprestigiar la labor de los periodistas y comunicadores sociales independientes o críticos de esta dinámica, al punto de que quedó al descubierto el espionaje realizado a algunos de ellos por medio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Desde el 2010, Juan Manuel Santos tomó la presidencia de Colombia. Este último periodo se ha caracterizado por las conversaciones de paz entre las FARC y el Gobierno nacional donde hoy ya

⁶¹ Álvaro Uribe fue presidente de Colombia entre el 7 de agosto de 2002 al 7 de agosto de 2010, cuando entregó su mandato a Juan Manuel Santos.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

es una realidad este acuerdo. Según análisis del Cinep, estos diálogos lograron disminuir las muertes violentas en el país, pero la situación de la libertad de prensa, como se ha indicado, tiende a retroceder.

5.1. Caso 1: Carmen Rosa Pabón – periodista de Arauca.

Perfil y el porqué se eligió este caso:

Carmen Rosa Pabón es periodista del departamento de Arauca desde hace más de 30 años. Su vocación y trabajo en los medios la ha hecho un personaje reconocido y respetado en la región. Ha trabajado en varios medios como *La Voz de Cinaruco*, *Caracol Radio*, *Meridiano 70*, entre otros.

Específicamente, en *La Voz del Cinaruco*, Pabón se ha desempeñado como directora de noticias. Asimismo, ha sido corresponsal para la Fundación para la Libertad de Prensa en Arauca (FLIP), miembro de la Corporación de Periodistas de Arauca y la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos - capítulo Arauca. En 2007 recibió el premio Orlando Sierra al Coraje de un periodista, otorgado por la Revista Semana-Petrobras.

El perfil de Carmen Rosa fue seleccionado para el desarrollo de esta tesis, además de las razones anteriormente presentadas, por su gran trayectoria en los medios regionales de Arauca, y por ser la corresponsal de la FLIP. De acuerdo al papel que los corresponsales desempeñan dentro de la Fundación,⁶² Pabón es quien reporta los casos de violaciones a la libertad de prensa en Arauca. Adicionalmente, ha colaborado en la realización de los documentos sobre casos de violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información. Como corresponsal, también se encarga de promover espacios para el fortalecimiento de un ambiente favorable de la libertad de prensa, en diálogo con las entidades del Estado involucradas en la defensa de los DD.HH.

⁶² Recordemos que la FLIP es una organización no gubernamental que les hace seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la protección de los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que ejercen la libertad de expresión sobre asuntos de interés público en Colombia. Además, promueve la libertad de expresión y el acceso a la información. La Fundación cuenta con una red de 30 corresponsales distribuidos en todo el país.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Asimismo, la trayectoria de Carmen Rosa la ha convertido en una conocedora del programa de protección a periodistas, pues fue ella, junto con otros colegas, quien formó parte de las primeras acciones del programa. Pabón participó de las reuniones con el Gobierno para implementar este programa. Cabe recordar que Carmen Rosa Pabón es víctima de amenazas por parte de las guerrillas y grupos paramilitares en Arauca.

Por lo anterior, la historia de Carmen Rosa representa la de varios periodistas amenazados por su oficio en regiones afectadas por el conflicto armado colombiano.

Contexto sociopolítico de la amenaza en Arauca

“En Arauca, tanto actores armados ilegales como Fuerza Pública solicitaban a los periodistas el cubrimiento de hechos relacionados con el conflicto armado en la región, cada uno desde su propia perspectiva. En el caso de los grupos armados ilegales, el no cubrimiento de los hechos referidos podía desencadenar en ataques al medio de comunicación mediante acciones dirigidas a la infraestructura, llamadas, panfletos o amenazas a viva voz. Entre los medios importantes atacados mediante algunas de estas modalidades se encuentra La Voz del Cinaruco, la Emisora Meridiano 70 y La Voz del Río Arauca” (Fecolper, 2015).

En este departamento, la violencia contra periodistas se recrudeció en la región a partir de 2002, con la presencia del paramilitarismo a través del Bloque Vencedores de Arauca, de los asesinatos de los periodistas Efraín Alberto Varela (2002) y Luis Eduardo Alfonso Parada (2003), amenazas y presiones frente al cubrimiento del conflicto (Fecolper, 2015).

Como se señalaba anteriormente, hoy los periodistas colombianos continúan bajo la amenaza permanente de las “bacrim”, bandas criminales compuestas por paramilitares e implicadas en el tráfico de droga. Agresiones, amenazas de muerte y asesinatos ubican a Colombia a la cabeza de los países más peligrosos del continente americano para la prensa, después de México. Organizaciones criminales como “Los Urabeños” o “Los Rastrojos” buscan silenciar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios que las investigan. Con frecuencia las agresiones son

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

cometidas en complicidad con los políticos locales y la mayoría permanecen en la impunidad (RSF, 2016).

De acuerdo con Fecolper, en su informe del 2015, “impactos de la violencia contra periodistas en el marco del conflicto armado”, como principales daños a la libertad de prensa, se registran:

- Censura y autocensura.
- Deterioro de la calidad y objetividad de la actividad periodística, en contravía de la función social que deben cumplir los medios de comunicación.
- Desestímulo generalizado frente al ejercicio de la profesión.
- Desaparición paulatina de la reportería. Desconfianza en el funcionamiento del sistema judicial frente a violaciones contra periodistas.

Historia – caso analizado:

“Ser víctima me hizo mejor periodista”

Carmen Rosa Pabón es periodista del departamento de Arauca. Su vocación inició cuando aún estaba en el colegio, y dos reconocidos periodistas iniciaron un plan piloto para incentivar la educación en el departamento. Carmen Rosa, por su buena voz y manejo del micrófono, se convirtió en una pieza fundamental para el programa. Desde ese momento, hace 40 años, nunca ha dejado de informar.

“Yo quería ser maestra, pero Efraín Varela (director y propietario de la emisora *Meridiano 70*) me enamoró del periodismo. Él me preparó y me decía que desde la primera vez que me vio, sabía que era la persona que estaba buscando para formar en los medios de comunicación”, recuerda Carmen Rosa (P. Carmen, comunicación personal, octubre 2016).

Sin embargo, ser periodista en medio de un país en conflicto armado interno no es fácil, y mucho menos en Arauca. “En el departamento, a raíz de la industria petrolera, llegaron los grupos alzados en armas. Primero fueron las FARC, y luego el ELN. Para los medios de comunicación eran momentos de tensión. A veces recibíamos citaciones de cualquiera de los grupos guerrilleros,

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

donde nos imponían a leer sus comunicados. En ese contexto se desarrollaba la agenda de los periodistas y, por consiguiente, la mía. La situación se agravó más, cuando en el 2000 también llegaron los paramilitares”, señala Carmen Rosa.

Situación de amenaza

Las amenazas contra Carmen Rosa comenzaron desde el 2000, cuando, como locutora de un programa radial, abrió los micrófonos al público que estaba cansado de los atentados en la región. “Ese año, las FARC atentaron contra la estación de energía de Arauca, dejando a todo el municipio sin luz. Gracias a que en La Voz del Cinaruco teníamos plantas de energía, fuimos la única emisora que logró seguir al aire. Ese día pasó algo particular: la población nunca se había atrevido a mostrar su inconformismo hacia las FARC, pero con el ataque, la gente empezó a llamar a la emisora y a reclamar que los dejaran fuera de los atentados. Algunos decían que a pesar de pagar *vacunas*, seguían los secuestros”, dice Carmen Rosa.

En los siguientes días, se llevaron a cabo varias marchas convocadas por la población. “Se hicieron marchas pacíficas, donde no hubo discursos. Allí, entrevisté al líder de los transportadores y al presidente de la Cámara de Comercio, quienes apoyaban las reclamaciones de los araucanos. Sin embargo, como consecuencia de las marchas, las FARC secuestraron al líder de los transportadores durante varios días. Unos días después fue liberado, pero en ese mismo momento fue asesinado el presidente de la Cámara de Comercio de Arauca, Carlos Israel Gaona, y también se conoció que yo tenía orden del comandante de la FARC para que me asesinaran”, recuerda Pabón.

“Allí comenzó mi angustia. Recuerdo que empezaron a llegar noticias: *‘estás muy mal con la guerrilla’*, *‘cuídate porque la guerrilla ha dado orden de ajusticiarte’*. Otras versiones decían que yo era *‘antinsurgente’*, algo que ni siquiera sabía qué era (antinsurgente). Preguntaba por qué estaba amenazada, qué les había hecho. En fin, tenía mucho miedo”.

Paralelo a las amenazas de las FARC, en la región los paramilitares también agredían a los pobladores. “Mi emisora tenía una corresponsal en Sarare, Arauca. Algunas personas llamaban a denunciar las acciones de los paramilitares en esa región, y nosotros los dejábamos hablar. Un día, me llegó la información de que un campesino había escuchado una conversación entre algunos

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

militares y un comandante de los paramilitares, donde también se estaba planeando mi muerte... Tengo en mi cabeza que tanto las FARC, como los paramilitares me querían matar, simplemente, por abrir espacios de denuncia a la comunidad”.

Toda esta situación se agudizó cuando Efraín Varela, mentor de Carmen Rosa, fue asesinado el 28 de junio de 2002. “Su trabajo como periodista consistía en hacer denuncias contra la Fuerza Pública, políticos, paramilitares y guerrilleros de la región. Durante su carrera enfrentó varias amenazas contra su vida y su labor como periodista”⁶³, señala Carmen Rosa.

“Ya la FLIP me había contactado por lo que estaba pasando. Me decían que saliera de Arauca, pero yo no lo quería hacer. Después de la muerte de Efraín, muy consciente de lo que estaba pasando, empecé a autocensurarme. Estaba aterrada, muy aterrada. Cambié mis horarios, se me notaba el miedo, y mi familia me decía que dejara mi trabajo. Después de la muerte de Efraín viene la muerte de Luis Eduardo Alfonso (periodista de la emisora *Meridiano 70*, asesinado el 18 de marzo de 2003 en Arauca), quien había reemplazado a Efraín. Con eso se disparó todo. Yo venía sufriendo casi dos años esta angustia e incertidumbre en secreto, sin saber a quién acudir. Unos días después de la muerte de Luis Eduardo, aparecieron dos listas con amenazas de las FARC y de los paramilitares. Yo aparecía en la lista de las FARC. Con eso, las alarmas se encendieron y el Gobierno nacional sacó de Arauca a los comunicadores amenazados. Yo realmente no quise irme en ese momento, pero ante la insistencia de la FLIP⁶⁴ y de mi familia, terminé saliendo a Bogotá con mis otros colegas. Aquello fue terrible, porque una cosa es narrar y escribir cifras de desplazamiento, y otra ser un desplazado”.

En Bogotá, Carmen Rosa y sus colegas amenazados asistieron a diferentes reuniones con el Ministerio del Interior, la FLIP, el entonces vicepresidente Francisco Santos, y otras organizaciones enfocadas a la libertad de prensa. “Un día, entre tantas reuniones, pedí regresar a Arauca. Me afectó el hecho de salir corriendo, sin haber hecho daño a nadie. Mi único pecado fue informar, servir de vehículo para que la gente se expresara y denunciar lo que pasaba. Me preguntaba por qué tenía

⁶³ Las investigaciones del caso señalaron a los paramilitares como los responsables del asesinato.

⁶⁴ De acuerdo con informes de la FLIP, Carmen Rosa era una de las periodistas de Arauca con mayor amenaza.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

que dejar mi casa. Por qué tenía que dejar mi trabajo, si esos señores (FARC y paramilitares) eran los que estaban afectando a la población”, recuerda Carmen Rosa.

“Arauca se había quedado sin información. Éramos 16 periodistas que habíamos tenido que salir corriendo, y eso estaba afectando al departamento. Sin embargo, mi situación era distinta a la de mis compañeros. Un colega, jefe de prensa de la Gobernación, lo obligaron a regresar porque estaba en abandono de puesto. Me impactó mucho la falta de comprensión que la Gobernación tuvo. Para su regreso, el Ministerio le entregó un equipo de protección (chaleco antibalas y un celular). Tiempo después, a mí también me dejaron regresar, pero a Cúcuta, donde tenía parte de mi familia. Desde allí, dirigía la emisora. Ahí me asignaron al ‘Plan Padrino’⁶⁵, donde una patrulla pasaba ocasionalmente a mi casa y revisaba que todo estuviera bien. Eso fue terrible. En el vecindario todos se preguntaban por qué iba la policía a mi casa. Con eso seguí con una depresión”.

“En cuanto a mi trabajo”, señala Pabón, “llamaba por teléfono a dirigir el noticiero. Cuando conocía que iban a tratar temas delicados sobre las guerrillas o los ‘paras’, les decía que no. Seguía autocensurándome. Con todo lo que estaba pasando, se vino abajo el noticiero. Primero porque quedó en manos de un colega y el lector. El lector también estaba amenazado. El colega que estaba ahí, que era el jefe de redacción con muy bajo perfil, hacía lo que podía hacer. Como yo no estaba, todo lo que fue la publicidad del noticiero se vino abajo”.

“Cuando pude regresar a Arauca, me tocó volver a empezar a buscar patrocinadores. Todo fue un desastre. Y si eso estaba pasando donde yo trabajaba, peor en la emisora de Efraín. Ellos estaban en cero. Fue un contexto horrible para todos, con depresión. Mis compañeros de la emisora comunitaria cuando regresaron, ya no tenían trabajo. A mí el dueño de la emisora donde estaba me veía como una hija. Por eso yo tuve mi trabajo al regresar, pero muchos de ellos no”.

⁶⁵ El Plan Padrino de la Policía consiste en el acompañamiento y patrullaje de la entidad a las personas amenazadas. En este caso, un integrante de la Policía hacía rondas diariamente en la casa de Carmen Rosa.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Medidas de protección

Inicialmente, la periodista Pabón recibió medidas de protección con nivel Extremo (Extraordinario). Le fue asignado un esquema de guardaespaldas (coordinado por la Policía), un celular y un chaleco. “En Bogotá nos dieron capacitaciones de cómo protegernos, qué se podía y qué no se podía hacer, a dónde ir. El policía que me asignaron me acompañaba todo el tiempo. También teníamos un vehículo para todos los colegas que estábamos amenazados. Además de la Policía, también había miembros del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), pero yo nunca confié en ellos. Dudaba por las amenazas que había recibido de los paramilitares, y **me asustaba que el DAS pudiera entregar mi información**”.

“Entre otras medidas de protección, empezamos a ser reportería en grupo. Salíamos en dos camionetas varios colegas de los medios de Arauca e investigábamos las mismas noticias. A pesar de las medidas de seguridad, una que otra vez recibí nuevas llamadas amenazantes. Con temor a tener que salir de mi ciudad, volvía a ocultar el acoso. Algunas llamadas me decían: ‘Sabemos que ya regresó’. Después de dos años, las cosas seguían igual”.

“Una vez, algún colega me comentó que las FARC seguían detrás de mí, y que, en las fiestas de Arauca, mientras yo hacía una transmisión, casi logran asesinarme. Ese día me salvó el policía que me estaba escoltando, quien se pegó a mi espalda todo el tiempo. Realmente, nunca me di cuenta de lo que había pasado. Nunca sentí que el policía ni siquiera estaba en mi espalda. A pesar de que yo tenía las medidas de protección, ellos (Las FARC) siguieron obsesionados, y duró mucho tiempo”.

Con el tiempo, el Ministerio del Interior empezó a bajar el nivel de riesgo, y con esto las medidas de protección. “Yo continuaba con el acoso, pero a pesar de eso dije: ‘Listo, que lo quiten’. Igual, seguí con el plan padrino que hacía rondas a la casa y me conformé con eso. La primera vez que pude salir al campo e ir a Tame, después de casi 6 años donde no salía, iba feliz. Sin embargo, en el camino de regreso, cuando paramos en una tienda y pregunté el precio de un producto, la persona que me atendió, reconoció mi voz y me dijo: ‘usted es Carmen Rosa Pabón’. El señor me alertó que el peligro contra mi vida continuaba y que lo mejor era que me fuera. Con eso, las alarmas se

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

volvieron a encender. Esa situación me alertó de que aún seguía en la mira. **De todo este proceso aprendí que los violentos, sean quienes sean, no tienen afán. Si te quieren matar, esperan lo que tengan que esperar.** Traté por muchos medios de enviar mensajes para que la amenaza se acabara, pero las FARC constantemente cambiaban de comandante y siempre les disgustaba lo que decía... No les gustaba ‘el tonito de la voz’, cómo daba la noticia, si la repetía, en fin, eran muy susceptibles”.

“En general, las amenazas han bajado gracias a los acuerdos de paz. En Arauca realmente no nos sentimos como antes. Sin embargo, ahora es el ELN quien me amenaza. De nuevo tengo esquema de seguridad. No obstante, debo admitir que el proceso de paz ayudó bastante, y espero que con el ELN suceda lo mismo”.

Para Carmen Rosa Pabón, ¿el Estado cumple con su labor de protección?

Para la periodista, que por mucho tiempo ha estado bajo amenazas, **las medidas de protección entregadas por el Estado le han permitido seguir siendo periodista.** “A pesar de estar limitada con un escolta, armado, y que me haya sentido como una periodista diferente, puedo decir que la protección que me dieron me permitió regresar a mi territorio, seguir informando y seguir trabajando como periodista. Mi esquema me dio la oportunidad de sugerir y manejar algo discreto. No andan encima. Gracias a ellos, volví a reencontrarme con la reportería en el campo. Gracias al esquema de seguridad que tengo pude volver a recorrer el Departamento, visitar todos los municipios con frecuencia... Antes no lo podía hacer”.

“Con todos estos cambios que estamos viviendo, siento que en uno o dos años volveré a realizar mi trabajo con normalidad. Queremos recobrar lo que perdí hace más de 10 años”.

El caso de Carmen Rosa y su respuesta ante la hipótesis de esta tesis es particular y esperanzadora. Para ella, los distintos mecanismos con los que cuenta el país, y que exigen los organismos internacionales, le han permitido seguir con su profesión. Su caso es una prueba importante del informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH de 2015 que se presenta en uno de los capítulos anteriores. Como se señala, “existen avances importantes en la

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

materia. La investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra periodistas en años previos e incluso ocurridos... demuestra que es posible investigar prioritariamente la línea vinculada al ejercicio profesional de estas víctimas y sancionar a los responsables. Pese a estos esfuerzos, buena parte de estos delitos permanecen en situación de preocupante impunidad” (OEA, 2015).

Carmen Rosa fue acogida por medidas que lograron evitar un daño mayor cuando fue amenazada. Con esto se comprueba que las acciones y disposiciones a tiempo, dispuestas por el Estado, son efectivas⁶⁶. El caso de Pabón logra determinar que Colombia es garante del Artículo 73 de la Constitución que expresa: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”. Además, que la UNP logró cumplir con su deber de brindarles, de manera especial, protección a las poblaciones en situación de riesgo extraordinario o extremo que le señale el Gobierno nacional o se determine de acuerdo con los estudios de riesgo que realice la entidad.

5.2. Caso 2: Sonia Godoy – periodista de Cauca

Perfil y el porqué se eligió este caso:

Sonia Godoy cuenta con más de 15 años de experiencia cubriendo el departamento del Cauca. Ha trabajado en *RCN Radio*, *Consejo de Redacción*, el portal *La Otra Orilla*, es profesora de la Universidad del Valle y corresponsal de la FLIP en el Cauca. Su vida la ha dedicado a la defensa de los Derechos Humanos por medio del cubrimiento de los hechos de orden público que se presentan en el departamento, una de las áreas más violentas del país en donde son comunes los enfrentamientos.

⁶⁶ A diferencia de la Corte, la Comisión cuenta con medidas cautelares. Este mecanismo se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

El perfil de Sonia Godoy fue seleccionado, además de las razones anteriormente presentadas, por ser víctima de amenazas: llamadas telefónicas, seguimientos e incluso la intromisión a su hogar. Asimismo, al ser corresponsal de la FLIP⁶⁷ cuenta con el conocimiento de las situaciones de amenaza de sus colegas regionales.

Un tema importante de Godoy es que es directora del portal *La Otra Orilla*, un medio de comunicación impulsado por la FLIP que busca que los periodistas amenazados continúen cubriendo los hechos de sus regiones, a pesar de su situación de amenaza. Con esto se evidencia un deseo para que el trabajo periodístico avance, a pesar de las circunstancias adversas.

“La Otra Orilla es un trabajo muy gratificante. Es una pausa periodística en donde uno puede decir ‘sí se puede trabajar desde la región’, y hacer investigaciones que permitan reflejar lo que está sucediendo es la mayor satisfacción. Siempre con los pies en la tierra porque uno sabe que no va a ser fácil, pero hay que vencer esas cosas y continuar”, afirma Godoy.

Por lo anterior, la historia de Sonia Godoy representa la de varios periodistas amenazados por su oficio en regiones afectadas por el conflicto armado colombiano.

Contexto sociopolítico de las amenazas en Cauca

Las amenazas contra Sonia inician en 2002. En un informe de Acnur (2007), las FARC han hecho presencia en el departamento desde hace años, a través del frente 47 “Aurelio Rodríguez”, en el norte; el frente 6, en el sur; las columnas Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Alirio Torres, en el centro, en las estribaciones de la cordillera Central; el frente 30, en la cordillera Occidental, y la Columna Móvil Arturo Ruíz y el frente urbano Manuel Cepeda en Cali. En lo atinente al ELN, este tiene presencia a través del frente Luis Carlos Cárdenas en el norte y el José María Becerra en el sur.

⁶⁷ Las implicaciones de ser corresponsal de la FLIP se encuentran expuestas en el perfil de Carmen Rosa Pabón.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

A partir del 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron en el departamento con el bloque Calima, compuesto por los frentes Cacique Calarcá, Pacífico y Farallones se presentaba que el departamento de Cauca es una región con presencia de las FARC, el ELN, Autodefensas, y serios problemas de narcotráfico.

El Cauca se ha caracterizado por la violencia contra el gremio, la estigmatización por parte de los grupos paramilitares y, en algunos casos, de la Fuerza Pública, a periodistas al señalarlos de ser colaboradores de la guerrilla por realizar cubrimiento de hechos del conflicto armado. Suelen seguir a estos señalamientos, amenazas generalizadas de los grupos armados ilegales contra los periodistas y colectivos de comunicación (Fecolper, 2015).

Se destaca como una particularidad de la región el deterioro de la confianza entre la comunidad y los medios de comunicación. Existen algunas zonas en las que se ha informado que el ejercicio de la actividad periodística debe ser previamente concertado con las comunidades y, en otros casos, con la Fuerza Pública.

Esta práctica periodística generalmente sesgada y en muchos casos impuesta desde la matriz de opinión que difunden los grandes medios nacionales, ha desencadenado en la pérdida de credibilidad de los periodistas en la región, el desprestigio de la profesión y en una sociedad menos o mal informada.

Sonia también cubre el departamento del Valle del Cauca. Allí se registra el mayor número de casos de muertes entre 1980-2015, con un total de 28 periodistas asesinados. En 2001 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) enviaron varios panfletos amenazantes contra periodistas que cubren el conflicto armado.

Historia – caso

“Los periodistas que tenemos pasión por nuestra labor, nunca dejamos de informar”.

Sonia nació en Bogotá, pero desde muy joven se trasladó a Popayán con su familia. Llegar a un territorio en conflicto armado la llevó a su vocación de periodista: “llegamos al Cauca en mi

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

bachillerato. Mis ganas de ser periodista comenzaron desde el mismo momento que llegué al departamento. Este lugar es un punto importante de conflicto armado y ha sido catalogado como zona roja. Estar en medio de esa situación y de ver tantas cosas, me llevó a querer contar las historias y escuchar a la gente. Una vez terminé mi bachillerato, regresé a Bogotá a estudiar Comunicación Social y Periodismo, siempre con la mentalidad de que en las regiones había mucho que contar”, relata Sonia.

Al graduarse de la universidad, la periodista trabajó durante un tiempo en Bogotá, pero su enfoque siempre estuvo regresar al Cauca. “La gente me decía que por qué me quería ir de la capital, si allí estaba todo. Tenía formas de avanzar en la vida profesional, pero yo siempre he tenido la certeza de que en la región siempre hay mucho que hacer, y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. A pesar de que mi trayectoria laboral y el ejercicio periodístico como tal han sido muy fuertes y duros, también ha sido gratificante. Estar acá me ha llevado a trabajar con medios nacionales e internacionales, lo cual ha valido la pena”, puntualiza Sonia. (G. Sonia, comunicación personal, diciembre 2016).

De acuerdo con Fecolper, “en el departamento del Cauca se presenta como patrón de violencia contra el gremio, la estigmatización por parte de los grupos paramilitares y, en algunos casos, por de la Fuerza Pública, a periodistas al señalarlos de ser colaboradores de la guerrilla por realizar cubrimiento de hechos del conflicto armado. Suelen seguir a estos señalamientos, amenazas generalizadas de los grupos armados ilegales contra los periodistas y colectivos de comunicación”. Los principales actores de amenaza son los carteles del narcotráfico, paramilitares, Bacrim, guerrillas, Estado - Fuerza Pública o funcionarios públicos”.

Situación de amenaza

Para Sonia, buscar siempre la noticia desde el lugar de los hechos la ha llevado a enfrentar varias situaciones de peligro en su labor. “En el 2004 hubo una situación compleja de movilizaciones masivas de indígenas, donde indígenas y el Esmad se enfrentaron. Los medios nos volcamos a esas manifestaciones. Durante casi dos años las protestas eran recurrentes, hasta en el 2008 fueron más intensas. En ese año se presentaron enfrentamientos muy fuertes entre la comunidad indígena y la fuerza pública. En esas manifestaciones, logramos grabar, con unos colegas de CNN, varias tomas

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

donde se veían a agentes de la Fuerza Pública disparando. Al lograr el video, tuvimos que ‘huir’ de la zona por la situación tan tensa que había. No podíamos enviar la información porque las señales habían sido bloqueadas. No teníamos conexión de nada, algo que realmente era un daño a la libertad de prensa. Nos tocó recorrer un gran trayecto (pasando ríos y trochas), con miedo de que nos quitaran el material, hasta que logramos volver a Popayán y enviar la información”, narra Godoy.

En medio de su trabajo periodístico, las situaciones de amenaza se intensificaron desde el 2007. “Todo comenzó en 2007, cuando me robaron material muy importante registrado en una de las manifestaciones que se habían presentado entre los indígenas y la Fuerza Pública. Muchos me decían que era un simple atraco, pero en otras perspectivas, como el de la FLIP, ese hecho no fue casual. Lo que pasó después fue lo más curioso. Un señor me llamó diciendo que había encontrado mi bolso, donde llevaba lo que me habían robado. El ‘tipo’, me citó en un barrio muy peligroso, en una ‘olla’, de Popayán, para entregarme mis pertenencias. Por necesidad de mi material, fui al sitio, y ahí me encontré con una señora. Lo que me regresó fueron cosas muy seleccionadas. Es decir, documentos a punto de vencerse, y muy poco de mi material periodístico. Las USB, CD’s, el celular no me lo regresaron, y ahí es donde estaba toda mi investigación. Todo estaba muy clasificado y no me pidieron recompensa por devolverme esos elementos. Cuando me iba a ir, la señora me pidió que me quedara y que esperara al hijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que no podía, y por mi seguridad, me fui del lugar. Con el tiempo, investigando y preguntando a varias fuentes que tenía, supe que la señora que me entregó mis papeles, era mamá de una persona del Ejército, y efectivamente el que me había llamado hacía parte de las Fuerzas Militares. Eso explica la insistencia del ‘tipo’ en querer conocerme. Otras veces me volvieron a llamar (las personas que habían regresado los documentos de Sonia), pero decidí no volver a contestarles el teléfono”, recuerda la periodista.

Después de esa situación, Sonia siguió con otras situaciones de alerta. “Como viaje bastante, yo tenía un conductor, que varias veces me dijo que había motos que nos seguían. Yo al principio no le creía, pero las persecuciones ya eran tan notorias y constantes, que era imposible no darse cuenta. Ahí empecé a tener mucho cuidado de no separarme de mi equipo periodístico. Cambiábamos de rutas, pero los seguimientos continuaban”.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Sin embargo, el hecho que más recuerda Sonia y que encendieron las alarmas aún más, fue en el 2010 cuando un hombre la abordó en un sitio público. “Yo también soy profesora, y cuando estaba en la Universidad, haciendo una diligencia, sonó mi celular. Yo estaba en un lugar muy cerrado, esperando mi turno, y a mi lado se sentó un señor, y había otro en la puerta. Ahí no noté nada extraño. **Cuando contesté mi teléfono, se identificaron de las FARC.** Me dijeron que necesitaban hablar conmigo, que tenían mis contactos y sabía dónde me movía y que ya tenían identificada a mi familia. Mi primera reacción fue preguntar para qué querían hablar conmigo, pero el ‘tipo’ cada vez me habla más fuerte y se identificó como el comandante (que luego fue asesinado) de un Bloque de las FARC. Por el susto de la llamada, mi reacción fue colgar y tratar de ir a la salida. Apenas colgué, al señor que tenía a mi lado, recibió una llamada. Lo primero que dijo fue ‘Habló con ella’. Ahí me quedé fría, y todo me tembló. Con eso comprobé que todo había sido real. Salí corriendo de la Universidad, y llamé a mi casa a alertar a la señora que cuidaba a mi hijo. Sin embargo, cuando hablé con ella a advertirle que no fuera a dar ninguna información, me contestó que ya habían ido esas personas’ (las FARC). Ella venía de un pueblo cercano donde la Guerrilla hacía una presencia muy fuerte y sabía a quién me refería cuando la llamé. El mensaje que me dejaron fue **‘no se haga negar que sabemos todo de usted’**”.

Medidas de protección

Sonia recibió medidas de protección por su riesgo de amenaza. Según la UNP, su situación era nivel Extremo (Extraordinario). “Después de todas estas situaciones de alarma, la FLIP me ayudó a documentar mi caso para la UNP. Sin embargo, pasó mucho tiempo para que la Unidad aceptara mi caso y me diera mis medidas de protección. Realmente, vine a recibir las medidas en 2012. Es decir, cinco años después de varias situaciones que todos considerábamos importantes”, resalta Godoy.

“El día que la UNP me notificó de mi caso, recibí un *Avantel*, que no me servía en la zona donde estaba. Cuando salía de Popayán se caía la señal, y con ese teléfono duré 4 meses sin funcionar. También me dieron un chaleco antibalas, un conductor y un vehículo. A pesar de que los señores que me transportaban estuvieron desde el primer día, el pago para ellos llegó seis meses después, y lo curioso es que luego también hubo demoras en los pagos. Es decir, a mí me tocó pagarles esos

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

seis meses, y esperar a que me consignaran. Lo bueno es que yo tenía cómo dar ese dinero, pero hay muchos periodistas que no tienen para pagar eso de sus bolsillos”, analiza Sonia.

Sonia también recuerda que, “había momentos en que le escribía a la UNP por las demoras en los pagos, pero ellos respondían que debía tener paciencia. Con mis medidas duré un año. Igual, en ese año también se presentaron situaciones de persecución y chuzada de mis teléfonos. Con todo eso, siempre traté de sobrellevar mi situación y seguí haciendo mi trabajo periodístico. Cuando se acabó el año con la protección, recibí casi dos años después una carta de la UNP que me decían que se acababa mi esquema. Es decir, parecía que yo tenía aún protección, cuando hace dos años que no contaba con nada de eso. Eso lo critico mucho, porque si me hubiera pasado algo, la UNP tenía información desactualizada.

Para Sonia Godoy, ¿el Estado cumple con su labor de protección?

Para la periodista, el Estado, a pesar de entregar medidas de protección, le falta mucho para conocer y reaccionar como se requiere ante las amenazas. “Yo tenía mi esquema, mi chaleco y mi celular que no me servía. Y con todo eso, **seguía haciendo mi trabajo periodístico, pero era más por mi pasión de informar y mi vocación de periodista.** Por ejemplo, había momentos que tenía que ir a zonas complejas, y no iba a llegar con las personas que me acompañaban, y con un chaleco que me ponía en evidencia. Había ciertos momentos que sí me servían las medidas, pero eran muy pocos. Yo empecé con preguntarme si eso es lo que uno realmente necesita para seguir con el trabajo periodístico. También debo decir que en ocasiones, las demoras en los pagos y desorden en la información de la UNP, se sumaba la angustia generada por las amenazas que uno recibe”.

Sin embargo, Sonia también reconoce que los Diálogos de Paz con las FARC fueron un gran avance para volver a zonas donde no había podido llegar por el conflicto armado. “Es verdad que ahora podemos recorrer la región, y eso está muy bien. No obstante, ahora hay nuevos grupos que están amenazando a líderes sociales, periodistas y a muchos más”.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Para el caso de Sonia, a diferencia de lo expuesto por Carmen, se refleja la situación de la mayoría de análisis expuestos anteriormente. Así como se comentaba en los capítulos previos, es evidente que la UNP tiene diferentes críticas: una de las más importantes es la demora en las respuestas. Esto se debe a todos los trámites que exige para cumplir y poder acceder a los esquemas de protección; situación que puede generar daños a los solicitantes. En la situación nacional que se presentaba, se aconsejaba que la UNP debe revisar los procesos de evaluación de riesgos y la entrega de información de las medidas. Asimismo, se recomienda examinar si las medidas implementadas en las regiones se ajustan a sus características socioeconómicas y demográficas, para garantizar el éxito de las mismas en el territorio. Esto se debe a otra de las mayores críticas hacia las medidas de protección: la UNP generaliza y estandariza muchos de los esquemas de protección, olvidando que cada territorio posee diferentes dinámicas⁶⁸.

El informe de RSF también es un referente del caso de Godoy. Según el documento, “la situación de la libertad de información sigue degradándose en Colombia. Ejercer una actividad periodística en el país sigue siendo muy peligrosa. Las Bacrim (bandas criminales nacidas del movimiento paramilitar), como Los Urabeños, Los Rastrojos y las Águilas Negras, al igual que las bandas de delincuentes (combos) –en ocasiones en complicidad con las autoridades–, intentan hacer callar a los periodistas que les molestan. La situación de Sonia, como otros más, muestra la urgencia de que se implementen programas de protección más eficaces y adaptados a las necesidades de los periodistas, en los que se estudien los riesgos que estos corren” (RSF, 2015)⁶⁹.

5. Análisis

¿El Estado colombiano cumple con las medidas necesarias de protección para que los periodistas amenazados, específicamente en región, desarrollen la libertad de prensa en territorios?

De acuerdo con los textos escritos, análisis e investigaciones que se analizaron en esta tesis, así como el relato de dos periodistas amenazadas por su oficio en Arauca y Cauca, respectivamente,

⁶⁸ Ver página 51 de la tesis.

⁶⁹ Ver página 53 de la tesis.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

el Estado, a pesar de cumplir con las medidas de protección a las periodistas, le falta corregir y optimizar sus procesos para lograr las medidas necesarias para continuar con el ejercicio de la comunicación. Se puede evidenciar que dependiendo de las regiones, varía el tipo de amenaza contra los periodistas y el actor que genera estos perjuicios; sin embargo, los principales daños son similares: censura, autocensura, desplazamiento y el deterioro de la calidad de vida. Asimismo, el conflicto armado es el detonante de la violencia contra los periodistas. Ya sea que las amenazas provengan desde alguno de los grupos armados ilegales, o desde el mismo Estado, el conflicto armado se vuelve una amenaza real y directa para el ejercicio mismo del periodismo regional⁷⁰.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) señala que para el 2000, el programa de protección de periodistas del Gobierno nacional creó el primer mecanismo de protección que se conoció como el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos CRER (Decreto 1592 de 2000) quienes registraban los casos. En él se reunía información complementaria, se analizaba el riesgo, se daban recomendaciones y se asignaban las medidas de protección.

De acuerdo con la FLIP, en su informe “15 años de protección a periodistas en Colombia: esquivando la violencia sin justicia”, hay que reconocer que para el 2015, y gracias a la implementación del CRER, ha disminuido el número de asesinatos. Desde el 2003 los homicidios a periodistas por razones de su oficio han mermado notablemente. Además, pese a las fallas en implementación e idoneidad de las medidas, en general los periodistas se sienten más seguros con las medidas de protección que les brinda el Estado (ver gráfica).

⁷⁰ Ver página 53 de esta tesis.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Número de periodistas asesinados por razones de su oficio. Fuente: FLIP.

Sin embargo, en Colombia, a pesar de contar con un esquema de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección, no se reconoce como el más garantista de la atención a los comunicadores y a los medios. Asimismo, es un gran avance que las muertes de periodistas disminuyan, pero las amenazas continúan. Retomando la entrevista que se le efectuó a Camilo Vallejo, abogado de la Fundación para la Libertad de Prensa, el sistema de protección tiene varias falencias: el principal es que es un sistema reactivo. Es decir, solo responde ante una amenaza, y no impulsa acciones de prevención. El segundo error corresponde a la desintegración de todas las ramas con las que cuenta el Estado. De acuerdo con los análisis de la FLIP, ante una amenaza a un periodista, la rama ejecutiva entrega un esquema de protección, pero la legislativa y judicial no han avanzado para implementar leyes que se cumplan y sistemas de justicia efectivos (V, Camilo. Comunicación personal, agosto 2016).

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

En el texto **‘Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación’** de 2009, realizada por los investigadores Juan Carlos Gómez y Juan Camilo Hernández, se asegura que *“el periodismo está amenazado de muerte, y a los tradicionales actores armados que lo acosaban se ha sumado, como factor de riesgo adicional, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en algunas regiones en su contra; y los gobiernos nacional, regionales y locales –a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa– se han convertido en factor desestabilizador por medio de presiones y sutiles manipulaciones”*.

Así como lo presenta el texto de Gómez y Hernández, no solo las bandas criminales o grupos ilegales son los actores de amenaza contra los periodistas, también hay registros de políticos y agentes estatales como principales perpetradores. Este tipo de daños contra la integridad del periodista, o del medio, por parte del Estado pueden ir desde amenazas, acciones violentas, actos de corrupción, entre otros. Es así que no solo el Estado ha tenido falencias en las acciones de protección, sino que también se ha convertido en un actor de riesgo.

Esa situación se logra evidenciar en los casos de las periodistas Carmen Rosa Pabón y Sonia Godoy. En cada una de las historias, se pudo demostrar que en región no solo los grupos guerrilleros amenazaban, también agentes del Estado y nuevas organizaciones criminales.

Asimismo, las cifras comprueban la falencia en el sistema de seguridad que da el Estado. Resulta alarmante que desde 1999 los registros de amenazas en vez de disminuir, se mantengan, y más alarmante que la impunidad continúe. O en el caso de las periodistas Pabón y Godoy, después de varios años en peligro, siguen, por alguna u otra razón, las afecciones contra su labor y su vida. Si un Estado contara con las medidas necesarias de protección para que los periodistas amenazados desarrollen la libertad de prensa en territorios, no deberían existir más casos que engrosen las alarmantes cifras.

Como lo señalaba Godoy, la ausencia de garantías reales de protección, aumenta la vulnerabilidad respecto de las presiones ejercidas por actores generadores de amenaza. Esta situación lleva a que de forma paulatina desaparezcan del ejercicio profesional el periodismo investigativo y la

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

reportería, pues no se corresponden los riesgos asumidos por los periodistas con la ausencia de garantías laborales y de protección que predomina en las regiones.

Hablar de libertad de prensa supone una constante: Es y siempre ha sido un derecho en amenaza. Los textos escritos, análisis e investigaciones representan el negativo panorama. El conflicto en Colombia ha contribuido a la amenaza para el desarrollo del periodismo. Esto, sumado a la corrupción y vicios en los procesos judiciales, tanto para investigar como para enjuiciar a los responsables. Las medidas de protección en Colombia, a pesar de ser ejemplo internacional, se quedan cortas a la hora de defender el derecho de libertad de expresión y prensa. A todos estos inconvenientes se suma el hecho de que los periodistas en territorio de conflicto son los de mayor amenaza.

6. Conclusión y propuestas

Colombia cuenta con una cantidad importante de herramientas de protección a la libertad de prensa (sentencias, leyes, decretos, instrumentos internacionales y medidas de protección), pero el indicador para determinar que las medidas son efectivas, y más en zonas de región afectadas por el conflicto armado, es que el número de amenazas, daños contra la libertad de prensa y muertes de periodistas llegue a cero. Una meta que está lejos de la realidad. Las afecciones contra la libertad de prensa continúan, y seguirán hasta que:

- El conflicto armado interno acabe: a pesar de ser uno de los puntos más complicados, los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno son un claro ejemplo de que es una meta alcanzable. Las periodistas Godoy y Pabón han señalado que en sus territorios las amenazas han disminuido por el hecho de las conversaciones, pero ahora se enfrentan al surgimiento y transformación de nuevas organizaciones criminales que amenazan con engrosar las cifras de daños contra el periodismo, sin olvidar a las antiguas formas de violencia generadas por el ELN, entre otros. La firma de acuerdos no garantiza *per se* la desaparición de las asechanzas contra el periodismo.
- Evitar que nuevas organizaciones surjan: como se señalaba anteriormente, las conversaciones de paz con las FARC han contribuido a mejorar la calidad de la libertad de prensa en Colombia, pero nuevas formas de violencia y lucha por los territorios amenazan

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

a la mayoría de departamentos colombianos. Es importante que el Estado prepare herramientas de prevención de estos hechos, y actúe eficazmente ante los que ya se están presentando.

- Amenazas desde el Estado: es claro cómo entes del Estado son victimarios de la libertad de prensa. En los informes presentados en esta tesis, como en las historias de Sonia y Carmen, el paramilitarismo y algunos organismos del Estado (DAS, Ejército, políticos, entre otros) han sido un factor de amenaza contra la libertad de prensa.
- La desarticulación de los entes nacionales y territoriales: es claro que las herramientas de protección a periodistas son eficaces si los entes ejecutivo, judicial y legislativo cumplen con su labor articulada. La corrupción e impunidad es un común en la mayoría de casos contra la libertad de prensa. Es necesario que se investigue la verdad, se logre la justicia en el caso y se llegue a la reparación de las víctimas.
- Impunidad: en este punto, como se señalaba, la impunidad es uno de los núcleos centrales de la violencia contra periodistas y en general de la violencia en Colombia. El 47 por ciento de los casos de asesinato de periodistas han prescrito, según lo recuerda la Fundación para la libertad de prensa en su Informe de 2014. Como se lee en el documento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Violencia contra periodistas trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia”.

(2013): “La impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves” (CIDH, 2013).

Además, la impunidad no permite resolver situaciones como las generadas por amenazas, no procesa ni disuade a quienes amenazan, así se obliga a que muchas personas en ejercicio del periodismo deban permanecer por largo tiempo bajo esquemas de protección que dificultan su trabajo. (CNMH, 2016). Los casos de Carmen Rosa y de Sonia Godoy dan cuenta de esto. Por una parte, el caso de Pabón es uno de los pocos que la justicia ha actuado y logrado la judicialización de los responsables, mientras que en el de Godoy, aún no hay una condena efectiva. Con esto se logra determinar por qué el Estado ha sido eficaz en su labor de protección a Pabón, mientras que para Godoy no se reconoce así.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- Apoyo a las regiones: una de las constantes amenazas de la libertad de prensa en Colombia es la falta de atención hacia las regiones. La libertad de prensa contribuye a la democratización. El apoyo a los medios regionales abrirá el espacio para ejercer un periodismo más amplio, y no solo visto desde lo nacional a lo local.

Por último, es clave señalar que la comunidad internacional ha estado presente apoyando las iniciativas de protección, de defensa del oficio, de formación y de fortalecimiento de la asociación como también se ha manifestado de distinta manera en todos estos años denunciando y haciendo evidente la gravedad de los acontecimientos derivados de la violencia y que han colocado al país en los primeros lugares de los crímenes y amenazas contra periodistas en el mundo. Muchos periodistas nacionales han salido al exilio, donde han sido apoyados por grupos e instituciones internacionales comprometidas con la causa colombiana. Aún son frágiles los avances que se han hecho a partir del talento, la solidaridad y el compromiso de las instituciones periodísticas colombianas. Necesitan del apoyo nacional, así como de la colaboración internacional sobre objetivos, planes y acciones concretas y evaluables (CNMH, 2016).

7. Anexos

Apéndice 1:

De acuerdo con Fecolper, esta reconstrucción se ha realizado a partir de la sistematización de la información suministrada por las 29 organizaciones de base que integran la Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper, de los encuentros de periodistas convocados durante 2015 por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y de entrevistas a periodistas víctimas del conflicto. No se busca hacer un relato exhaustivo de hechos victimizantes, sino identificar principales patrones de victimización en cada una de las regiones, con el ánimo de aportar insumos para profundizar este panorama en las regiones.⁷¹

⁷¹ Los cuadros que se presentan a continuación, son extraídos del documento de Fecolper. La redacción e información son expresamente de la organización y no de la autora de esta tesis.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

	<p>Región Andina (Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima).</p>
Patrones de victimización	<p>Amenazas directas e indirectas. Atentados y asesinatos. Desplazamiento forzado. Presión sobre la forma, contenido y lenguaje que debía utilizarse en el cubrimiento del conflicto, a través de llamadas, citación a reuniones o mensajes a través de terceros. Traslado de expedientes judiciales sobre investigaciones que vinculaban a paramilitares en violaciones a derechos de los</p>
	<p>periodistas, desde Antioquia hacia Córdoba. Acceso de actores armados legales e ilegales a las denuncias realizadas en su contra por parte de periodistas. Presuntos vínculos entre funcionarios del Estado con estructuras paramilitares (Santander, Antioquia, Norte de Santander). Presiones por parte de funcionarios públicos en torno al cubrimiento de hechos relacionados con las administraciones locales y regionales como redes de corrupción, contrataciones indebidas o vínculos con grupos armados.</p>
Principales Daños	<p>Censura. Exclusión de temas relacionados con el conflicto armado en la agenda temática noticiosa. Deterioro de la confianza del gremio en el Estado, por inoperancia del sistema de justicia. Abandono de la profesión. Múltiples informaciones sobre conflicto social y armado no salieron al aire o se presentaron de forma parcial, por temor a las represalias de los actores armados legales e ilegales. Autocensura como mecanismo de autoprotección, ante el incumplimiento de las obligaciones del Estado frente al ejercicio pleno de la libertad de prensa. Desaparición de la actividad periodística investigativa. Muchos medios se han limitado a transmitir informaciones oficiales de las administraciones locales, regionales o la Fuerza Pública, sin hacer contrastación de fuentes. En varias regiones predominan programas musicales, sin contenido editorial.</p>
Principales victimarios	<p>Paramilitares – BACRIM Políticos y funcionarios públicos, algunos relacionados con grupos armados ilegales (Parapolítica) Guerrillas Estado – Fuerza Pública</p>

(FECOLPER, 2015)

Región Orinoquía

	Región Orinoquía (Meta, Vichada, Casanare y Arauca)
Patrones de victimización	<p>Imposibilidad de acceso a fuentes de información diversas sobre el conflicto, por presunta restricción directa de las Fuerza Pública.</p> <p>Cierre de medios, a través de sabotaje a la infraestructura o del bloqueo de fuentes económicas como la pauta publicitaria.</p> <p>Amenazas por parte de actores armados (legales e ilegales) o amenazas anónimas, posteriores al cubrimiento de hechos del conflicto o casos de corrupción.</p> <p>Desplazamiento forzado de periodistas.</p> <p>Poderes regionales y locales, sean institucionales o de facto, definen lo que se puede y no se puede decir en medios de comunicación.</p> <p>Presión de actores armados legales e ilegales a los periodistas sobre la forma, contenido y lenguaje que debía utilizarse en el cubrimiento del conflicto.</p> <p>Ataques a los medios de comunicación como represalia por cubrimiento de hechos relacionados con el conflicto.</p> <p>Negligencia o inacción de la justicia respecto a violaciones contra periodistas.</p>
Principales Daños	<p>Censura y autocensura.</p> <p>Deterioro de la calidad y objetividad de la actividad periodística, en contravía de la función social que deben cumplir los medios de comunicación.</p> <p>Desestimulo generalizado frente al ejercicio de la profesión.</p> <p>Desaparición paulatina de la reportería.</p> <p>Desconfianza en el funcionamiento del sistema judicial frente a violaciones contra periodistas.</p>
Principales actores	<p>Guerrillas</p> <p>Paramilitares</p> <p>Estado -Fuerza Pública</p> <p>Estado - Funcionarios Públicos.</p>

(FECOLPER, 2015)

Región Pacífico

Región Pacífico (Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño).	
Patrones de victimización	<p>Amenazas generalizadas y dirigidas contra periodistas y organizaciones de periodistas o medios de comunicación alternativos.</p> <p>Desplazamiento forzado.</p> <p>Asesinatos de periodistas.</p> <p>Estigmatización.</p> <p>Amenaza o presión a las autoridades judiciales que investigan los casos de violencia contra periodistas</p> <p>Estigmatización y señalamiento a periodistas que cubren el conflicto por parte de actores armados.</p> <p>Obstrucción al ejercicio periodístico: zonas en las cuales el ejercicio de la actividad periodística debe ser acordado con comunidades o Fuerza Pública.</p> <p>Restricciones y presiones frente al abordaje de temas que vinculan la responsabilidad de la Fuerza Pública en violaciones a derechos humanos contra la población civil.</p> <p>Uso de prendas militares por parte de periodistas y/o el uso de medios de transporte militar para entrar a hacer cubrimiento de hechos del conflicto.</p> <p>Auto-amenazas o amenazas entre compañeros del gremio.</p>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Principales Daños	<p>Censura.</p> <p>Autocensura como medida de protección, frente al cubrimiento periodístico de hechos referidos a la confrontación armada o la operación del narcotráfico.</p> <p>Naturalización de la violencia ejercida contra periodistas.</p> <p>Resquebrajamiento del tejido social del gremio y de la comunidad.</p> <p>Impunidad.</p> <p>Deterioro de la confianza del gremio en el Estado.</p> <p>Exclusión de temáticas como el conflicto armado, el narcotráfico y la corrupción, en la agenda informativa regional.</p> <p>Grave deterioro de la confianza entre periodistas y comunidades.</p> <p>Asimetría entre garantías de los periodistas de región, respecto a los periodistas nacionales para el cubrimiento de temáticas sobre conflicto y narcotráfico.</p> <p>Deterioro de la calidad informativa y desnaturalización de la actividad periodística.</p> <p>Audiencias desinformadas o parcialmente informadas sobre la dinámica del conflicto en la región.</p> <p>Precariedad e inestabilidad laboral.</p> <p>Agenda informativa sesgada, impuesta desde la matriz de opinión que construyen los grandes medios nacionales.</p> <p>Pérdida de credibilidad de los periodistas en la región.</p>
Principales actores	<p>Carteles del narcotráfico</p> <p>Paramilitares – BACRIM</p> <p>Guerrillas</p> <p>Estado - Fuerza Pública</p> <p>Estado - Funcionarios Públicos</p>

(FECOLPER, 2015)

Región Caribe

	Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y San Andrés, Providencia)
Patrones de victimización	<p>Asesinatos.</p> <p>Amenazas dirigidas.</p> <p>Censura y presión a los periodistas frente al cubrimiento de hechos del conflicto armado, carteles del narcotráfico y lógicas de corrupción.</p> <p>Uso de la asignación de pauta publicitaria como forma de censura.</p> <p>Estigmatización a los periodistas y su labor periodística.</p> <p>Bloqueo al acceso de información relacionada con entidades estatales, incluida la Fuerza Pública.</p> <p>Presión paramilitar para que medios locales y comunitarios promocionaran al grupo armado ilegal.</p> <p>Cierre de medios.</p> <p>Cambio o abandono de la profesión.</p> <p>Desplazamiento forzado.</p> <p>Inestabilidad laboral y económica que facilita procesos de cooptación o sometimiento de los periodistas frente a actores armados.</p> <p>Violencia paramilitar: masacres, asesinatos y el desplazamiento forzado.</p> <p>Presión de los grupos armados sobre la forma, contenido y lenguaje que debía utilizarse en el cubrimiento del conflicto.</p>
Principales Daños	<p>Censura y autocensura.</p> <p>Pérdida del trabajo.</p> <p>Imposibilidad de los periodistas locales de hacer cubrimiento sobre temas de la región.</p> <p>Politización clientelista de los medios de comunicación y los periodistas de la región.</p> <p>Afectación de la imparcialidad del ejercicio periodístico y condicionamiento de las informaciones que se publican en función de intereses políticos y económicos.</p> <p>Audiencias desinformadas o sesgadamente informadas.</p> <p>El periodismo investigativo se reduce como opción profesional.</p> <p>Imposibilidad de un proyecto de vida de largo plazo para periodistas.</p>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

	<p>Deterioro de la salud física y psicológica, debido a las fuertes presiones políticas y armadas que operan sobre la actividad periodística.</p> <p>La construcción de relaciones de afinidad entre actores armados y periodistas, afectó de modo grave la objetividad para informar sobre el conflicto.</p> <p>Reuniones de periodistas con actores armados lograron impactar fuertemente en la confianza al interior del gremio, reforzando su dispersión.</p> <p>Transformación de la naturaleza de la actividad periodística mediada por la adopción de criterios como la "precaución y la ponderación de consecuencias" para definir qué información se publicaba.</p> <p>Marginación de muchos periodistas de la región de los medios nacionales o la imposibilidad de firmar con nombre propio las notas publicadas.</p> <p>Cambio de enfoque temático en el ejercicio profesional.</p> <p>Abandono de la profesión.</p>
Principales actores	<p>Paramilitares – BACRIM</p> <p>Políticos y funcionarios públicos, algunos relacionados con grupos armados ilegales (Parapolítica)</p> <p>Estado – Fuerza Pública</p> <p>Guerrillas</p>

(FECOLPER, 2015)

Región Amazonía

	Región Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés)
Patrones de victimización	<p>Lógicas de presión, amenaza y censura contra medios de comunicación local.</p> <p>Intimidación mediante la invitación a periodistas para participar de reuniones con actores armados ilegales.</p> <p>Atentados contra la infraestructura de medios.</p> <p>Cierre de medios y pérdida de empleo de los periodistas vinculados.</p> <p>Abandono de la profesión.</p> <p>Uso de distintivos de prensa por parte de las Fuerza Pública para el desarrollo de operativos militares (Operación Jaque).</p>
Principales Daños	<p>Censura y autocensura.</p> <p>Instalación de una matriz de opinión de polarización entre buenos y malos, sin profundidad en los análisis respecto de los hechos del conflicto armado que se cubren.</p> <p>Desestimulo generalizado frente al ejercicio de la profesión.</p> <p>Afectación de la imparcialidad del ejercicio periodístico y condicionamiento de las informaciones que se publican en función de intereses políticos y económicos.</p>
Principales actores	<p>Guerrillas (FARC-EP)</p> <p>Estado – Fuerza Pública.</p> <p>Paramilitares</p>

8. Bibliografía

- Ámbito Jurídico (2016) Línea jurisprudencial: 25 años de libertad de expresión e información en Colombia. Recuperado el 27 de julio de 2016 en <https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/constitucional-y-derechos-humanos/linea-jurisprudencial-25-anos-de-libertad-de-expresion-e-informacion-en-colombia>
- Artículo 13 - Convención Americana sobre Derechos Humanos (2016) Tomada el 07 de mayo en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&IID=2>
- Banco de la República. Un papel a toda prueba, la libertad de prensa. Toma en: <http://www.banrepcultural.org/un-papel-a-toda-prueba/la-libertad-de-prensa>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- Beneficiarios de la unidad nacional de protección. Disponible en: <http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20FINAL%20UNP%20-%206.pdf>
- Caracol Radio (2016) 3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa. Caracol Radio. tomada el 10 de mayo de 2016 en http://caracol.com.co/radio/2016/05/03/internacional/1462254669_323006.html
- Caso del Periódico La Nación; Caso Marta Colomina y Liliana Velásquez; Asunto diarios El Nacional y Así es la Noticia; Asunto de la emisora de televisión Globovisión; Asunto Luisiana Ríos y otros (Radio Caracas Televisión-RCTV).
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977 – 2015), Bogotá, CNMH.
- CIDH (2014) <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC196-14-ES.pdf>
- CIDH, (2009) Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión. Párr. 15. Tomada el 02 de mayo de 2016 en: <http://www.cidh.org/pdf%20files/Un%20agenda%20Hemisferica%20espanol.pdf>
- CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. OAS Doc.9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, vol.2 / Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión. Pag. 399.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016). Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Tomada el 02 de mayo de 2016 en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/brochures/brochure_web_spanish_julio_13.pdf
- Comité Internacional de la Cruz Roja, (2017). Tomada el 17 de noviembre de 2017 en <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/79clz7.htm>
- Comité Internacional de la Cruz Roja, (2017). “Colombia: herramientas para periodistas que informan sobre el conflicto”. Tomada el 17 de noviembre de 2017 en <https://www.icrc.org/es/document/colombia-herramientas-utiles-sobre-dih-que-todo-periodista-deberia-tener>
- Comité Internacional de la Cruz Roja, (2017). La protección de los periodistas en misión profesional peligrosa. Tomada el 17 de noviembre de 2017 en <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdm8f.htm>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- Constitución Política de Colombia (1991).
- Corte Constitucional de Colombia (2016), Sentencia C-442/11. Disponible en:
- Corte Constitucional de Colombia (2016), Sentencia T-040/13. Disponible en:
- Corte Constitucional de Colombia <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/tematico.php?vs=268&pg=1&campo=/&sql=libertad%20de%20expresion>
- Corte Constitucional de Colombia. (2016). Medidas de protección Colombia. Tomada el 22 de noviembre de 2015 en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-078-13.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-417/09, de 26 de junio de 2009. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-417-09.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1677149 de 23 de abril de 2009. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-298-09.htm>
- Corte de Constitucionalidad de Guatemala (2010). Expediente 863-2010 de fecha 24-08-2010. Disponible en: <http://www.cc.gob.gt/documentosCC/ResolucionesIntPub/863-2010%2024-08-2010.pdf>
- Corte Constitucional (2011). Relatoría c 442-11. Tomada en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-442-11.htm>
- Corte IDH (2009). Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 114.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009), caso Perozo y otros vs. Venezuela sentencia de 28 de enero de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf
- Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/carpionicolle.pdf>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Perozo y otros vs. Venezuela (2016). Tomada el 12 de junio de 2016. Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2887/11.pdf>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Perozo y otros vs. Venezuela sentencia de 28 de enero de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Tomada en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf
- Corte Suprema de Justicia de Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2012. “Quantín, Norberto Julio c/ Benedetti, Jorge Enrique y otros s/ derechos personalísimos”. Disponible en:

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

<http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=693527>

- Fecolper (2015), “Impactos de la violencia contra periodistas en el marco del conflicto armado”. Bogotá Tomada desde: <http://fecolper.com.co/aportes-de-la-fecolper/>
- FLIP (1999), Estado de la libertad de prensa en Colombia en 1998. http://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Informe%20anual%20sobre%20la%20libertad%20de%20prensa%20en%20Colombia%201998.pdf
- FLIP (2013), Manual de autoprotección para periodistas | Medidas de protección frente a situaciones de riesgo. (pág 53) Disponible en: http://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Manual%20Autoproteccion%202013.pdf
- FLIP (2014), “Informe sobre libertad de prensa durante los procesos electorales de 2014”. Recuperado el 9 de agosto de 2015 en: <http://flip.org.co/es/content/informe-sobre-libertad-de-prensa-durante-los-procesos-electorales-de-2014>
- FLIP (2015) 60 años. Informe sobre el estado de la libertad de prensa en 2014. Primera ed. Bogotá. P:60. Tomada el 22 de noviembre en: http://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Informe%20Anual%202014%20FLIP_0.pdf
- Godoy, Sonia, comunicación personal, diciembre 2016.
- Gómez Patricia, Velásquez Mónica (2003). “La guerra, una amenaza para la prensa” Medios para la Paz, Bogotá.
- Gómez-Giraldo, J. C., & Hernández-Rodríguez, J. C. (2009). Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación Palabra Clave • ISSN 0122-3285 • Volumen 12 Número 1 • Junio de 2009.
- Gómez-Giraldo, J. C., & Hernández-Rodríguez, J. C. (2009). Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación.
- Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, vol.2 / Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión. v.; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II) Pag. 399.
- Know How Asesores (2015). Medición del nivel de satisfacción de los beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección.
- Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General 34 – Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Libertad de opinión y libertad de expresión. Aprobada en el 102º periodo de sesiones, 11 a 29 de julio de 2011. CCPR/C/GC/34
- OEA, 2015 <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=606&lID=2>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- Organización de los Estados Americanos (2016). Tomada en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=327&lID=2>
- Organización de los Estados Americanos (2016). Declaración Universal de Derechos Humanos. Tomada el 25 de mayo de 2016 en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=163&lID=2>
- Organización de los Estados Americanos (2016). Medidas Cautelares. Tomada el 11 de mayo de 2016 en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp>
- Organización de los Estados Americanos (2016). Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Tomada el 15 de junio de 2016 en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2>
- Organización de los Estados Americanos (2016). Jurisprudencia nacional sobre libertad de expresión y acceso a la información = National jurisprudence on freedom of expression and access to information / [Preparado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. p.; cm. (OEA documentos oficiales; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.) (OAS official records; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.)
- Organización de los Estados Americanos (2016). Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Tomada el 02 de mayo de 2016 en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/brochures/brochure_web_spanish_julio_13.pdf
- Organización de los Estados Americanos. (2016) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Tomada el 20 de abril de 2016 en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=104&lID=2>
- Organización de los Estados Americanos. (2016) Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Tomada el 07 de mayo de 2016 en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2>
- Organización de los Estados Americanos. (2016) Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. Tomada el 22 de noviembre de 2015 en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2>
- Organización de los Estados Americanos. (2016) Declaración conjunta sobre la libertad de expresión y el combate al extremismo violento. Tomada el 22 de noviembre de 2015 en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1022&lID=2>
- Organización de los Estados Americanos. (2016) Declaraciones Conjuntas. Tomada el 22 de noviembre de 2015 en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- Organización de los Estados Americanos. (2016) Mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Tomada el 22 de noviembre de 2015 en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/mandato/default.asp>
- Organización de los Estados Americanos. (2016) Sistema Interamericano. Tomado el 22 de noviembre de 2015 en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/sistema_interamericano.asp
- Pabón, Carmen Rosa, comunicación personal, octubre 2016.
- r., inter alia, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC- 18/03. Serie A No. 18, párr. 112-172; Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra nota 22, párr. 173- 189.
- Ramírez Salazar, Darío. (2010). Cobertura del crimen organizado y libertad de prensa. (Spanish). Revista Mexicana de Comunicación. Pág: 12-16.
- Ramírez G, Sergio / Gonza, Alejandra (2007). La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pág. 62.
- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de DDHH. (2013) Jurisprudencia nacional sobre libertad de expresión y acceso a la información. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/2013%2005%2020%20JURISPRUDENCIA%20DOMESTICA%20SOBRE%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20Y%20AI.pdf>
- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de DDHH. (2013), Jurisprudencia nacional sobre libertad de expresión y acceso a la información. Pág. 48. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/2013%2005%2020%20JURISPRUDENCIA%20DOMESTICA%20SOBRE%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20Y%20AI.pdf>
- Reporteros sin Fronteras (2015). Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015. Recuperado el 29 de diciembre de 2015 <http://index.rsfs.org/#!/insights/perspectives-other-indicators>
- Reporteros sin Fronteras (2016). Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016. Recuperado el 17 de agosto de 2017 <http://www.informeannualrsf.es/news/informe-anual-2016-america/>
- Reporteros sin Fronteras (2016). La libertad de información en el mundo en 2015. Tomado el 11 de mayo de 2016 en <http://www.informeannualrsf.es/>
- Reporteros sin Fronteras (2016). Tomada el 24 de julio de 2016 en: <https://rsf.org/es/colombia>

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

- Sistema Interamericano, (2016). Tomada el 29 de abril de 2016 en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/sistema_interamericano.asp
- Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Amparo Directo en Revisión 2044-2008, de 17 de junio de 2009. Disponible en: <http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/08020440.010.doc>
- Supremo Tribunal Federal de Brasil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 130 - Distrito Federal. Sentencia de 30 de abril de 2009. Disponible en: <http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=605411&idDocumento=&codigoClasse=776&numero=131>
- Supremo Tribunal Federal de Brasil. Sentencia de 2 de septiembre de 2010. Medida Cautelar en Acción Directa de Inconstitucionalidad ADI-4451. Disponible en: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2613221>
- Tamayo, Camilo Andrés (2005). Libertad de prensa en el conflicto armado colombiano: algunos apuntes para el debate. Recuperado el 27 de julio de 2016 en: <http://www.voltairenet.org/article127297.html>
- Tribunal de Apelaciones en lo Penal del Uruguay. Sentencia No. 161 de 12 de julio de 2010. Autos caratulados: COELHO JURIOL—Ricardo José. Denuncia Ley 16.099 c/ MORALES BARTABURO, Rodrigo. I.U.E.: 30257/2009.
- Unidad Nacional de Protección (2016). Recuperada el 27 de julio de 2016 en: <http://www.unp.gov.co/>
- UNP (2014), rendición de cuentas 2013 oficina asesora de planeación e información. Tomada el 02 de agosto de 2016 en: <http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/INFORME%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20UNP%202013.pdf>
- UNP (2015), procedimiento solicitudes de protección. Subdirección de evaluación del riesgo. Tomada el 2 de agosto de 2016 en: <http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/PR-01%20V4%20PROCEDIMIENTO%20DE%20SOLICI%E2%80%8BTUDES%20DE%20PROTECCI%C3%93N.pdf>
- UNP Unidad Nacional de Protección (2016) “¿Cómo lo hacemos?”. Recuperada el 02 de agosto de 2016 en: <http://www.unp.gov.co/como-lo-hacemos>
- Uprimny, Rodrigo (2006) ‘Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992 - 2005)’. Legis.
- Unidad de Víctimas, comunicación personal, septiembre 2016.
- Vallejo Camilo, comunicación personal, julio 2016.

Periodistas en zonas de conflicto, entre el miedo a las amenazas y el amor a la profesión

Medios de comunicación

- <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1504297>
- http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/septiembre/10/09102004.htm
- <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4614247>